ANTIOQUIA 2023: UN INFORME REVELADOR SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – Corpades y Agencia de Prensa Análisis Urbano

2023

ANÁLISIS URBANO.ORG AGENCIA DE PRENSA

CORPADES Corporación para la Paz y el Desarrollo Social

ANTIOQUIA 2023: UN INFORME REVELADOR SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – Corpades y Agencia de Prensa Análisis Urbano 2023

ANÁLISIS URBANO .ORG AGENCIA DE PRENSA

CORPADES Corporación para la Paz y el Desarrollo Social

Antioquia 2023: Un Informe Revelador sobre los Derechos Humanos

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social

Corpades y Agencia de Prensa Análisis Urbano

Portada: https://pixabay.com/es/

Medellín, diciembre 2023

Contenido

Introducción....3
La violencia armada en Colombia: un análisis de las cifras de OCHA....5
Presencia de grupos armados en Antioquia....6
Análisis sobre el fenómeno de Homicidios....7
Homicidios Colombia....7
Homicidios en Antioquia por género de la víctima....8
Tipo de arma usada....10
Homicidios en las subregiones de Antioquia....10
Tasa de homicidios por subregiones....11
Los 30 municipios de Antioquia con las tasas más altas....11
Análisis de homicidios por Subregiones....12
Valle de Aburrá....12
Oriente....13
Suroeste....14
Urabá....15
Nordeste....16
Norte....17
Bajo Cauca....18
Occidente....19
Magdalena Medio....20
Masacres en Antioquia 2022-2023....21
Casos de Personas Dadas por Desaparecidas....21
Casos de desapariciones por mes....22
Desapariciones por género....22
Desapariciones por Subregión....22
Los 10 municipios con más casos de personas dadas por desaparecidas....23
Homicidios personas defensoras de DDHH en Antioquia 2022-2023....23
Alerta por el riesgo del desmonte de esquemas de seguridad a líderes sociales.24
Amenazas por subregión....25
Desplazamientos masivos....26
La extorsión como dinámica de las economías ilegales....27
Extorsiones por subregión....27
Secuestros por subregiones....28
Paz Total, Paz Urbana: Retos y desafíos....28
El papel de la negligencia de las autoridades....29
Conclusiones generales....31
Metodología....33
Bibliografía....34

Introducción

La historia en Colombia tiende a repetirse. Por ello, debemos hurgar en el pasado varios elementos, principalmente cómo a partir de la polarización política entre los partidos históricos la violencia logra objetivos políticos, también el abandono histórico del Estado a las zonas rurales y el control de territorios para la producción de cocaína y otros negocios ilícitos son factores que han generado conflictos, en Colombia de manera recurrente a lo largo de los años.

Estos aspectos se siguen repitiendo en diferentes períodos de la historia colombiana y han llevado a situaciones de violencia y crisis política, lo que refuerza la idea de que la historia colombiana tiende a redundar.

Desde la creación de los partidos a mediados del siglo XIX, puede describirse como una sucesión de hegemonías de partido, que en muchos casos se acompaña de hechos violentos para conquistar el poder o para conservarlo (Gutiérrez, 2012).

Al mismo tiempo, el hecho de que la política colombiana tiene una fuerte polarización entre los partidos conservadores y liberales, que en ocasiones utilizan la violencia como forma de lograr sus objetivos políticos ha sido otro factor que indiscutiblemente ha generado conflictos en Colombia.

Otro factor que ha contribuido a los conflictos en Colombia es el abandono histórico del Estado a las zonas rurales, especialmente a los campesinos, lo que ha hecho que los grupos al margen de la ley se aprovechen de la debilidad del Estado para obtener poder y control territorial. Durante el período de La Violencia en Colombia, Antioquia se caracterizó por ser una de las regiones más aisladas por la violencia.

El origen de la escalada de violencia, los asesinatos de liberales y conservadores se recrudeció debido a la llegada de tropas y la posterior instalación del Batallón Córdoba en el territorio antioqueño.

La llegada de estas tropas, sumada a la intensificación de la campaña electoral de 1953, llevó a la creación de grupos paramilitares que atacaron indiscriminadamente, especialmente a los habitantes rurales (Gutiérrez, 2012).

Estos grupos, a menudo liderados por personas adineradas y con poder, perseguían sus propios intereses mediante el uso de la violencia, lo que desencadenó enfrentamientos violentos entre los bandos políticos.

Al mismo tiempo, la toma del control territorial por parte de grupos armados también contribuyó a generar nuevos focos de violencia y prolongar el conflicto (tal cual sucedió después de la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Colombiano en 2016).

El fenómeno de la violencia en Antioquia, al igual que en cualquier otra región, es resultado de una serie de factores, dinámicas y cualidades específicas.

En primer lugar, los factores históricos regionales tienen una larga tradición en los conflictos y la violencia, especialmente relacionados con el conflicto social y armado.

En segundo lugar, Antioquia ha sido una zona estratégica para en la cadena productiva, de distribución nacional e internacional del tráfico de sustancias de uso ilícito, debido a su ubicación geográfica y a la presencia de rutas de tráfico de drogas. La presencia de carteles de la droga y la lucha por el control de estas rutas ha sido uno de los principales detonantes de la violencia en la región.

El narcotráfico ha generado disputas territoriales, rivalidades entre bandas y ha permeado diferentes sectores de la sociedad, contribuyendo a la proliferación de la violencia.

Sin lugar a dudas, la desigualdad socioeconómica es un factor predominante debido a la marcada brecha entre ricos y pobres, lo que genera tensiones y conflictos sociales.

La falta de acceso a oportunidades económicas, educativas y de salud, así como la exclusión social, son caldo de cultivo para el surgimiento de actos violentos.

Cuarta, y no menos importante, la escasez de empleo formal y la precarización laboral son factores que influyen en la dinámica de la violencia. Muchas personas se ven obligadas a buscar alternativas económicas en actividades ilegales, lo que alimenta el ciclo de la violencia y la delincuencia.

El presente informe también menciona la responsabilidad de la fuerza pública, inteligencia del Estado, Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Antioquia en la lucha contra la impunidad y la garantía de la seguridad de las poblaciones se debe principalmente a su papel como entidades encargadas de preservar el orden público y proteger a los ciudadanos.

La falta de coordinación y colaboración entre estas entidades ha permitido la presencia y consolidación de grupos armados ilegales en la región, lo que ha generado un ambiente de impunidad y violencia que afecta gravemente a la población civil.

La violencia armada en Colombia: un análisis de las cifras de OCHA

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas - OCHA - es una organización que no conoce fronteras, que trabaja incansablemente y en coordinación con otras organizaciones para proporcionar una asistencia vital a las personas afectadas por las crisis humanitarias en todo el mundo.

La labor de OCHA no se limita a proporcionar ayuda humanitaria, sino que también actúa como un observatorio de la situación de los derechos humanos en aquellas regiones golpeadas por la violencia y la guerra. Su equipo de especialistas realiza un meticuloso análisis de la información disponible sobre fenómenos de violencia en zonas de conflicto, con el objetivo de tener una visión completa sobre las necesidades humanas y garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger y salvar vidas.

Fuente: (OCHA, 2023)

El departamento de Antioquia enfrenta una preocupante situación de violencia y violaciones a los Derechos Humanos, según el balance general realizado por la organización OCHO. Durante el período analizado, se registraron 336 acciones violentas que pusieron en alto riesgo a la población y generaron violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de diversos actores armados.

Categoría	Cantidad
Total general	**336**
Homicidio intencional en persona protegida	125
Amenazas (individuales/colectivas)	49
Enfrentamiento entre actores no estatales	15
Reclutamiento, vinculación y utilización de menores	15
Restricciones a la movilidad y sobre, u obstrucción de acceso a servicios y asistencia por parte de las poblaciones	15
Impacto por movilización social/protestas	14
Secuestro	13
Desplazamientos masivos	11
Masacre (homicidio colectivo)	10
Combates	9
Trampas explosivas- TE	9
Restricciones o interferencia con el paso de agencias, personal o bienes en el país	7
Incursión	6
Desaparición forzada	5
Mina antipersonal - MAP	5
Ataque, ocupación o uso infraestructura y/o bienes civiles (incluye bienes culturales y religiosos)	4
Munición sin explotar - MSE	4
Emboscada	3
Interferencia en la implementación de actividades/acción humanitaria	3
Violencia sexual	3
Amenazas y violaciones en contra el personal humanitario y sus instalaciones	2
Atentado	2
Ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la población civil	1
Bloqueo de vías y/o Retén ilegal	1
Control social (toques de queda, códigos de conducta, manuales de convivencia, carnetizando)	1
Hostigamiento	1
Obstáculos e impedimentos a la entrada de agencias, personal y bienes al país	1
Operaciones militares y hostilidades continuas impidiendo a las operaciones humanitarias	1

La principal violación a los derechos humanos fue el homicidio intencional de personas protegidas, con un alarmante registro de 125 casos de Ocha.

Además, se reportaron 49 casos de amenazas individuales y colectivas, 15 enfrentamientos entre actores no estatales, así como 15 casos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto.

La movilidad también se vio afectada, posiblemente relacionada con actores armados, con 13 secuestros, 11 desplazamientos masivos y 10 masacres.

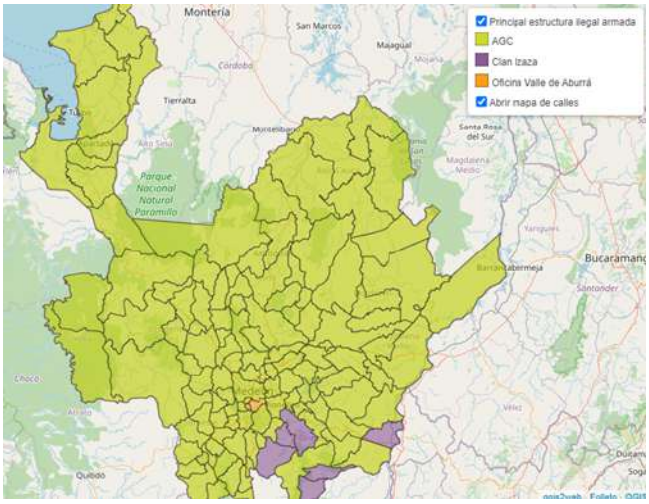
Del mismo modo, se registraron nueve combates, nueve casos de trampas con explosivos y siete casos de restricciones o interferencias en el paso de agencias, personal o bienes en el país.

Estos preocupantes datos plantean la interrogante sobre si algunos de estos casos constituyen violaciones a los acuerdos pactados entre el gobierno nacional y los diferentes actores involucrados en las mesas jurídicas y de diálogo. Es imperativo que se tomen medidas contundentes para garantizar la seguridad y protección de la población ante esta alarmante situación.

Presencia de grupos armados en Antioquia

Las prácticas de la guerra continúan arrebatando los sueños y las esperanzas de una ciudadanía que anhela fervientemente la paz en nuestro país.

En la región de Antioquia, el poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se hace sentir en 116 municipios, generando un clima de temor y desolación.



Fuente: (Análisis Urbano, 2022)

Lamentablemente, las confrontaciones armadas persisten y siguen cobrando la vida de inocentes civiles que se ven atrapados en medio del fuego cruzado.

El análisis detallado del mapa revela con precisión las disputas territoriales entre las AGC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Disidencias y la Oficina de Valle de Aburrá, así como otros actores involucrados en esta compleja dinámica.

Comprender las raíces y los patrones de violencia en estos territorios resulta fundamental para explicar cómo estos fenómenos logran perpetuarse a lo largo del tiempo.

Es imperativo que tanto las autoridades como la sociedad en general se comprometan activamente en la búsqueda de soluciones efectivas que contribuyan a desmantelar estas estructuras criminales y promover una cultura de paz duradera.

Solo a través del esfuerzo conjunto podremos construir un futuro donde los sueños y esperanzas de nuestra ciudadanía sean respetados y protegidos.

Análisis sobre el fenómeno de Homicidios
Homicidios Colombia

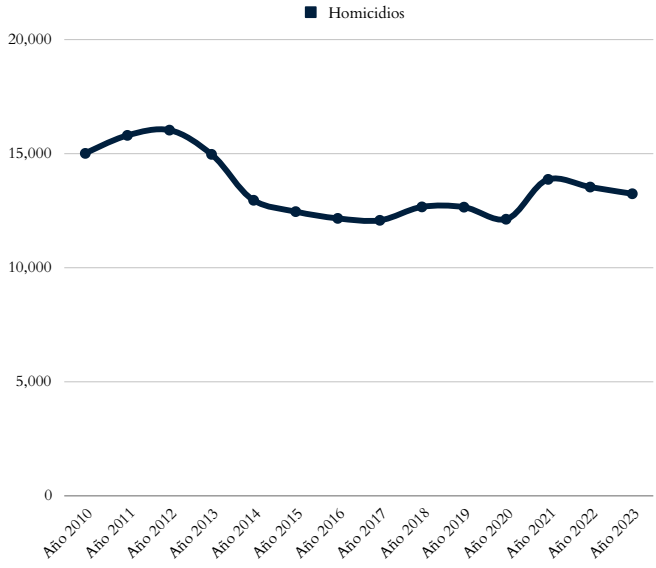
Colombia, un país con una triste tradición de conflicto social, ha experimentado un cambio tras la firma del acuerdo de paz. Se vislumbra un escenario propicio para la construcción de la paz en el territorio, especialmente con el avance de las mesas de diálogo jurídico con otros actores armados durante el gobierno de Gustavo Petro. Existe una creciente necesidad humanitaria que busca reducir los fenómenos de violencia en el país.

Según los datos proporcionados por el ministro de Defensa, en 20 departamentos se ha registrado una disminución del homicidio, lo que representa el 62,5% del país. Además, también se destaca una reducción del 14% en el hurto a comercios y del 42% en entidades financieras. El Gobierno espera alcanzar niveles similares a los de 2014 y 2015, ya que desde 2016 ha habido un aumento en el hurto, que solo se redujo en 2020 debido a la pandemia (Análisis Urbano, 2023).

Es alarmante la cifra de 189,586 personas asesinadas en Colombia desde 2010, lo que equivale a un promedio de 13,542 homicidios al año y 37 homicidios por día. Esta situación refleja una constante vulneración del derecho a la vida, causada por factores como el conflicto territorial, la presencia de actores armados y la intolerancia. Es necesario promover una cultura social que defienda este derecho fundamental. En Colombia, se han identificado varios departamentos con altos índices de homicidios, entre ellos se encuentran Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena y Norte de Santander. Estos departamentos representan áreas donde la violencia y los homicidios son más frecuentes (Policía Nacional, 2023).

La siguiente gráfica muestra una reducción sostenida de los homicidios en Colombia desde 2012, alcanzando cifras históricas antes de 2020.

En cierto modo, en 2021 se produjo un punto de inflexión con cerca de 13,874 personas asesinadas violentamente, generando una tasa de 27.1 casos por cada 100,000 habitantes.

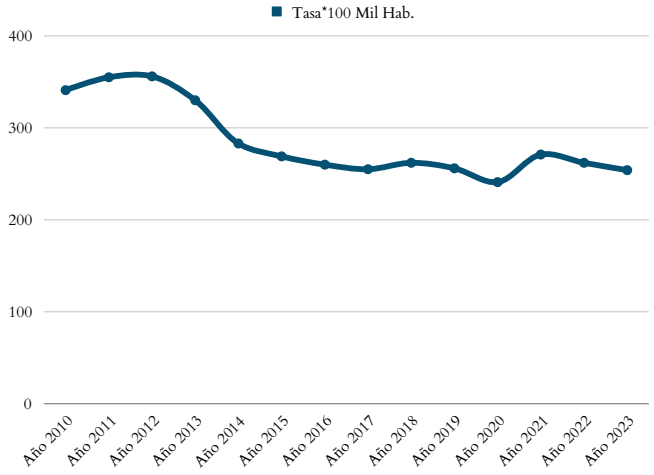


Construcción propia con cifras de (Policía Nacional, 2023)

Esto podría explicarse por la reconfiguración de grupos armados tras los acuerdos de 2016, quienes recurrieron a la violencia para imponer su poder en los territorios.

Desde la firma del acuerdo de reducción de homicidios, se ha observado una tendencia general a la baja en los casos y tasas de homicidios en Colombia. Hasta cierto punto, en el año 2018, durante la presidencia de Iván Duque, se registró un máximo histórico de 27 casos por cada 100,000 habitantes.

A partir de finales del año 2022, la tasa ha vuelto a descender y se proyecta una reducción significativa. No obstante, se proyecta un descenso significativo en 2023, con una tasa estimada de 25.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual representa una reducción considerable en el país.



Construcción propia con cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

Homicidios en Antioquia

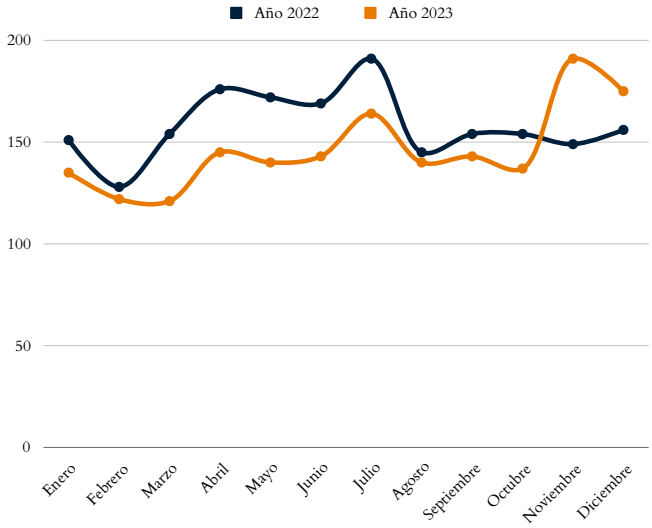
La reducción de homicidios en el país se atribuye, en gran medida, a los esfuerzos emprendidos por el actual Gobierno del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien ha llevado a cabo diálogos y negociaciones con los diferentes grupos armados ilegales. Estas acciones han generado un ambiente de expectativas positivas en cuanto a la paz y la disminución de la violencia (Análisis Urbano, 2023).

En cambio, resulta sorprendente y cuestionable que la nueva comandancia de Policía en Antioquia haya decidido excluir información sobre casos de homicidios en sus reportes oficiales. Esta omisión es especialmente preocupante considerando que continúan ocurriendo hechos lamentables en regiones como Suroeste, Oriente y Urabá.

Es fundamental tener acceso a datos precisos y actualizados sobre los homicidios, ya que esta información permite evaluar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas y tomar medidas adecuadas para prevenir y combatir la violencia. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para construir una sociedad más segura y justa.

En el departamento de Antioquia, desafortunadamente, se ha caracterizado por ser una de las regiones con mayor incidencia de casos de homicidio. Durante el año 2022, se registraron un total de 1,899 personas que perdieron la vida como víctimas de acciones violentas.

Esto implicó que mensualmente se cometieran aproximadamente 158 homicidios en Antioquia.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023)

Sin embargo, en el año 2023, según las proyecciones presentadas en este informe, se observa una reducción significativa en los casos de homicidio. Durante este año, se estima que se cometieron alrededor de 146 homicidios mensuales. A diciembre, se calcula que el total de homicidios será aproximadamente 1,756.

Estos datos reflejan un posible ambiente propicio para la reducción de homicidios y la defensa del derecho a la vida en Antioquia durante el año 2023.

Homicidios en Antioquia por género de la víctima

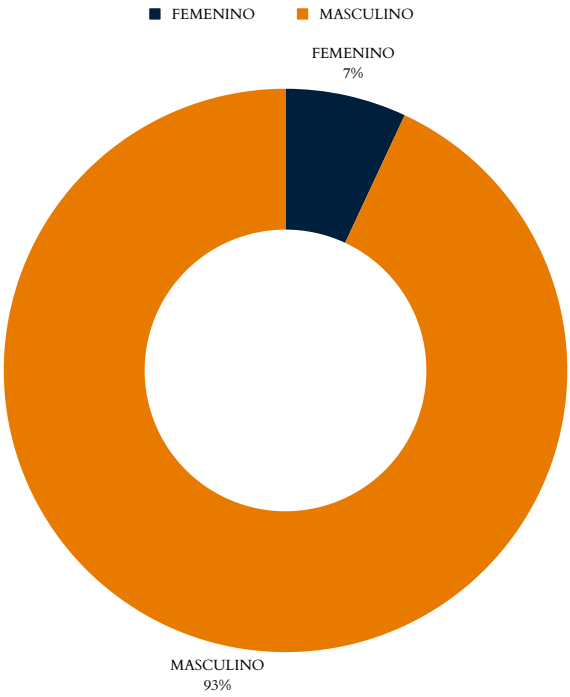
En cualquier informe, es fundamental analizar las dinámicas y patrones de violencia de género, especialmente en países como Colombia.

Estas tendencias violentas y los elementos históricos que persisten pueden ofrecer explicaciones clave para comprender este fenómeno y proponer estrategias de reducción.

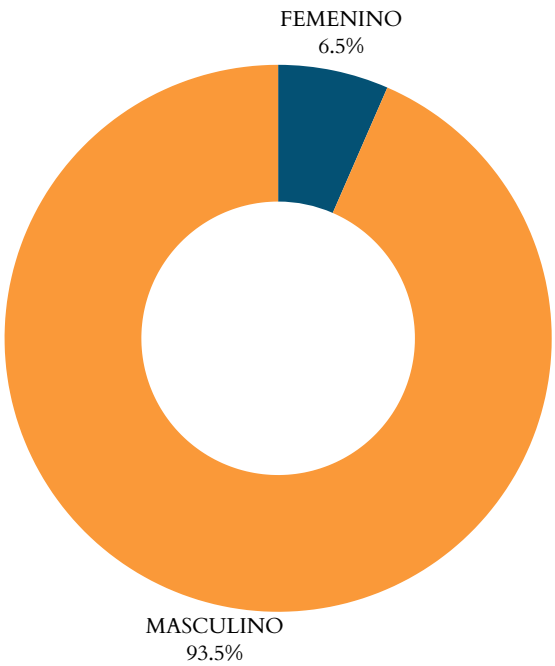
Tanto en Colombia como en el departamento de Antioquia, persiste un patrón preocupante: la mayoría de las víctimas de violencia mortal son personas de sexo masculino. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento en las muertes violentas de personas de género femenino, lo que requiere una atención urgente (Análisis Urbano, 2023).

Además, es importante destacar que en el departamento y la ciudad de Medellín se evidencia una creciente preocupación por los casos de homicidios dirigidos a personas de la comunidad LGTBIQ+ (Análisis Urbano, 2023).

Asimismo, se observa una situación particularmente alarmante con respecto a los feminicidios, donde se han identificado patrones de violencia que parecían haber disminuido, pero que persisten de manera compleja.



Construcción propia con Cifras año 2022 de (Policía Nacional, 2023)



Construcción propia con Cifras año 2023 de (Policía Nacional, 2023)

Estos patrones resaltan la urgente necesidad de fortalecer los entornos protectores tanto para las mujeres como para las poblaciones diversas.

En el marco de las dinámicas de violencia en el departamento de Antioquia, una de las preocupaciones es el alto número de muertes por género.

Durante el año 2022, el 93% de los casos reportados fueron contra personas de sexo masculino, mientras que el 7% fueron contra personas de sexo femenino. Aunque se ha observado una reducción del 31.1% en los homicidios violentos contra mujeres y del 26.4% contra hombres, la tendencia indica que se mantienen los porcentajes de muertes violentas entre hombres y mujeres, siendo el 93% cometido contra hombres y el 7% contra mujeres.

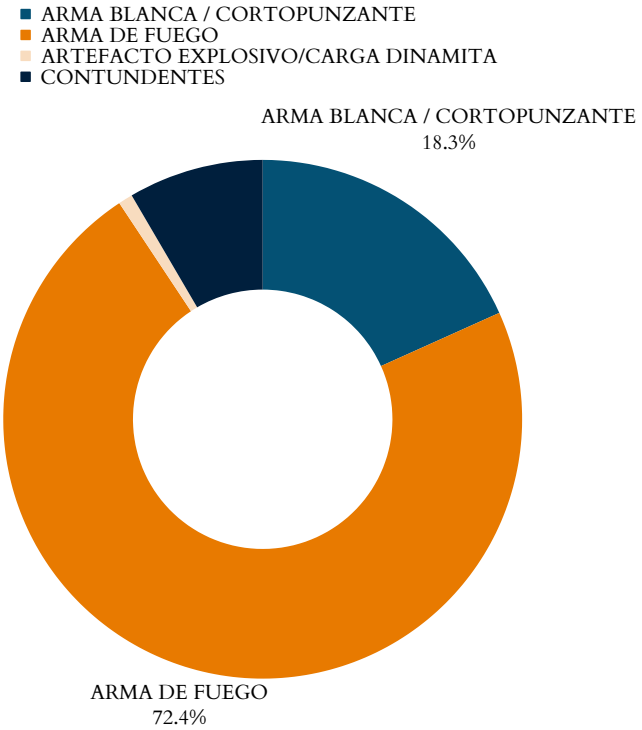
En Antioquia, más de 100 mujeres han sido asesinadas este año, siendo 22 casos catalogados como feminicidios y el resto como hechos de violencia. Recientemente, se reportaron dos nuevos casos en Dabeiba y Medellín, elevando la cifra total a 107 víctimas en el departamento (IFM Noticias, 2023).

Tipo de arma usada

En los casos de muertes violentas es importante explicar el tipo de arma utilizada, especialmente en un país como Colombia, donde existen grupos armados y una presencia significativa de armas legales e ilegales.

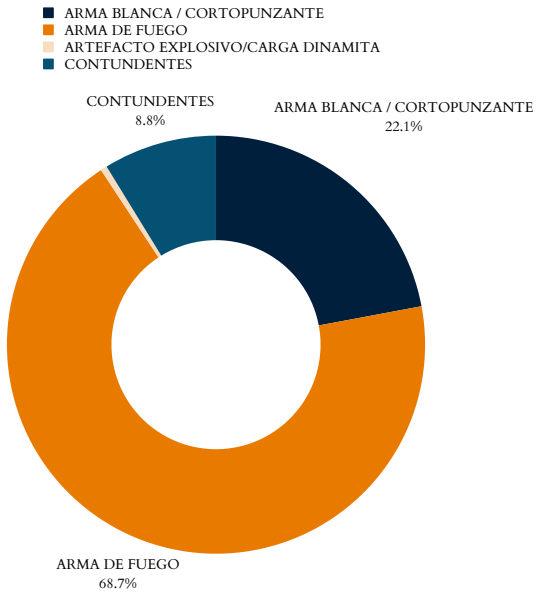
El análisis de este patrón puede proporcionar información valiosa que puede revelar vínculos con grupos armados, la disponibilidad y laxitud en el uso de ciertos tipos de armas, y brindar pistas sobre la dinámica de la violencia y los actores involucrados.

Durante el año 2022, se reportó que el 72.4% de los casos de homicidio involucraron el uso de armas de fuego. Sin embargo, en el año 2023, esta cifra descendió ligeramente a un 68.6%.



Construcción propia con Cifras de 2022 (Policía Nacional, 2023)

Por otro lado, hubo un incremento significativo en el uso de armas blancas o cortopunzantes, pasando del 18.2% al 22% de los casos. Este dato es especialmente relevante.



Construcción propia con Cifras de 2023 (Policía Nacional, 2023)

En cuanto al uso de objetos contundentes, se observó un aumento del 8.4% al 8.7% durante el mismo periodo. Por otro lado, las muertes causadas por artefactos explosivos disminuyeron del 0.8% al 0.5%.

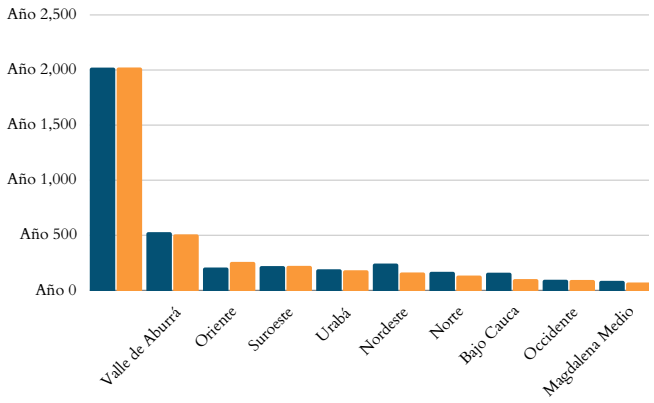
Estos datos indican una reducción en las muertes por armas de fuego, mientras que otros tipos de armas muestran un aumento en su utilización en actos violentos.

Una práctica que se está volviendo común es la aparición de cadáveres en costales o lanzados al río Medellín. El número elevando de las personas muertas halladas en estas circunstancias ha sobrepasado los 21 casos en lo que va del año (Caracol Radio, 2023).

Homicidios en las subregiones de Antioquia

Según los porcentajes mencionados, la subregión del Valle de Aburrá es la que registra el mayor número de muertes violentas con un 29%, seguida por el Oriente antioqueño con un 14.8%, el Suroeste con un 12.8%, Urabá con un 10%, Nordeste con un 9.3%, y el Norte con un 7.7%.

Estas subregiones presentan fenómenos complejos relacionados con las muertes violentas, como se muestra en la gráfica.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023)

En los últimos años, se ha observado una reducción significativa de la violencia en el Bajo Cauca, lo cual ha sido un alivio para la población.

Esta disminución representa una reducción del 36.3%. En el Nordeste, los homicidios se redujeron en un 33.3%, mientras que en el Norte la reducción fue del 20%. En el Magdalena Medio, los homicidios disminuyeron en un 17.6%.

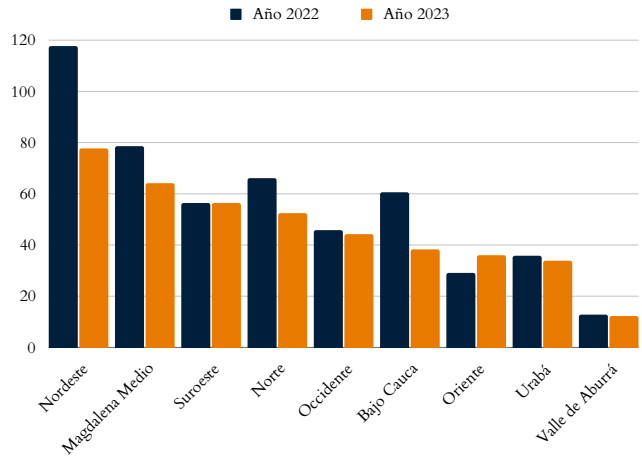
Es preocupante que el Oriente por 5° año consecutivo siga experimentado un aumento en las cifras y las tasas de homicidios que para el año 2023 se acercan al 24.6% en los casos de violencia, lo cual representa una preocupación.

En el Suroeste, aunque el aumento fue mínimo, cercano al 1%, indica que persiste una tendencia de violencia en esta subregión.

Tasa de homicidios por subregiones

Establecer la tasa de homicidios en zonas y subregiones nos permite tener una visión más clara y detallada de la distribución geográfica de la violencia, identificar áreas con altos índices de criminalidad y dirigir recursos y recomendar a las autoridades e intervenciones preventivas para reducir estos índices de violencia.

Es muy destacable y alentador que el departamento de Antioquia haya logrado reducir la tasa de homicidios en un 9.6% al comparar los años 2022 y 2023.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

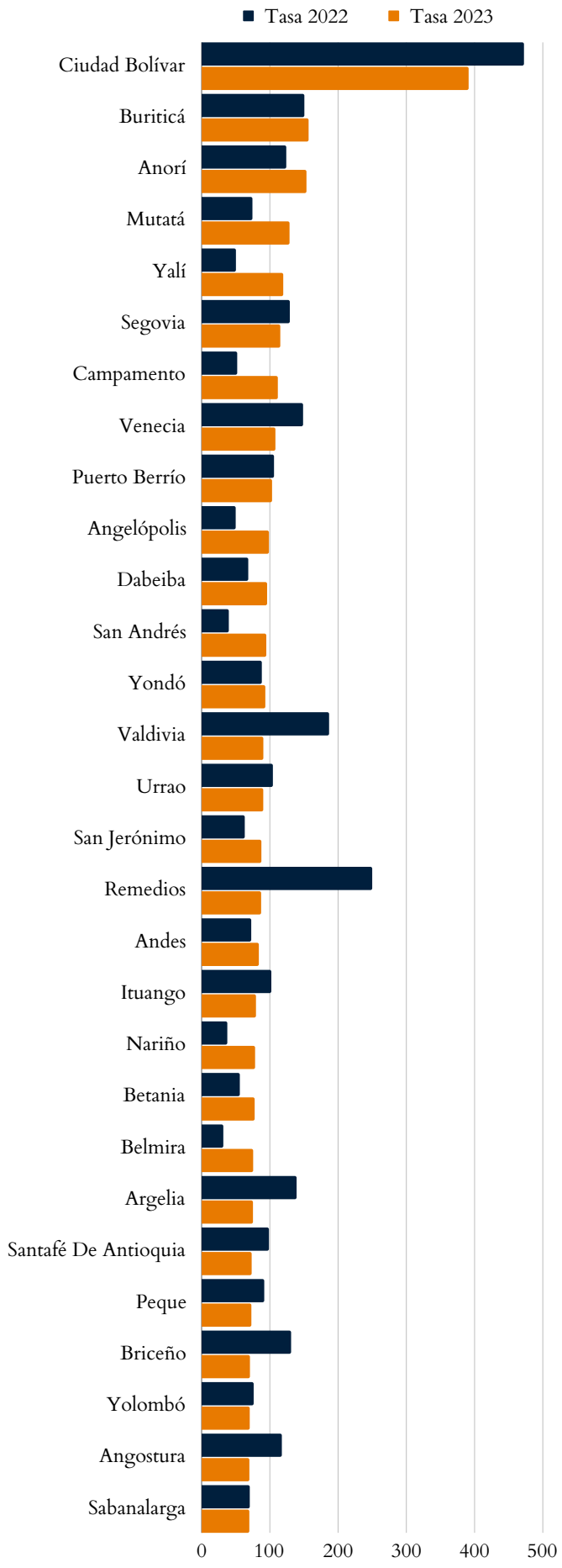
Durante el año 2022, se registraron 1899 casos de homicidios, lo que resultó en una tasa de 28 casos por cada 100,000 habitantes.

Sin embargo, en el año 2023, con cerca de 1750 casos de homicidios calculados hasta diciembre, la tasa disminuyó a 25.3 casos por cada 100,000 habitantes.

Los 30 municipios de Antioquia con las tasas más altas

Las tasas de homicidios en el departamento de Antioquia nos permiten identificar algunos patrones geográficos de violencia probablemente relacionados con disputas territoriales entre actores armados y otros fenómenos que indican una presencia armada o avanzada territorial en ciertas áreas.

Los 30 municipios más violentos del departamento presentan características particulares como economías ilícitas, megaproyectos minero-energéticos, corredores estratégicos y otros factores que pueden influir en los niveles de violencia.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

En el departamento, se observa una reducción en las tasas de homicidio en diferentes zonas, excepto en el oriente y suroeste. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar, la tasa disminuye de 472.38 a 391.28 por cada 100,000 habitantes. Es preocupante que siga siendo el municipio con la tasa más alta.

Otros municipios como Buriticá pasan de 150.55 en 2022 a proyectarse en 156.77 en 2023. Anorí aumenta de 124.04 a 153.63, Mutatá de 74.45 a 128.82 y Yalí de 50.27 a 119.61. Estas fluctuaciones generan preocupaciones por la vulneración del derecho a la vida.

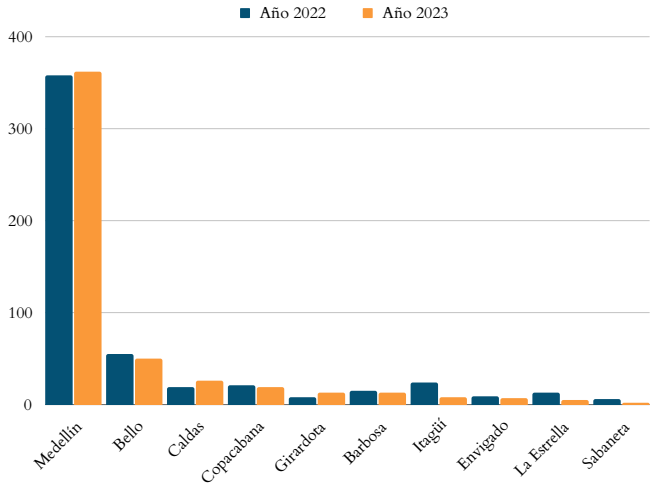
Análisis de homicidios por Subregiones: Valle de Aburrá

Las alertas tempranas emitidas para el Valle de Aburrá nos brindan información crucial sobre el contexto de riesgo y amenaza que se presenta en la región.

Este contexto se configura a partir de la presencia y confrontación de diferentes actores armados que buscan establecer un control hegemónico en el territorio durante décadas.

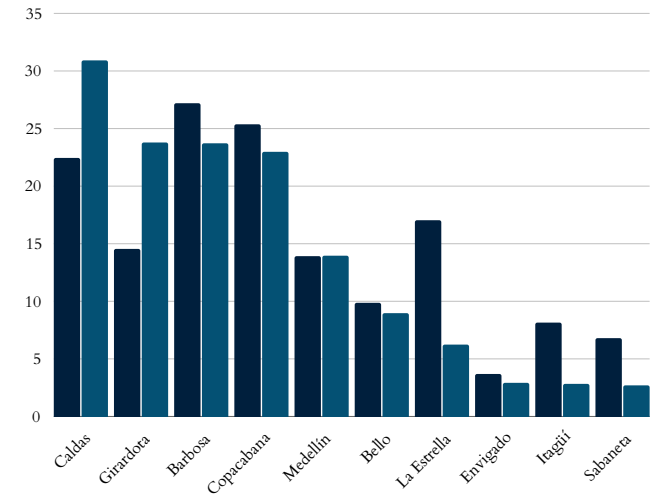
Estas estructuras ilegales han mantenido un poder histórico en la zona, y su principal objetivo es el monopolio de las economías ilícitas, así como el control social y territorial.

Las alertas emitidas por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) para el Valle de Aburrá son un reflejo de la gravedad de la situación. Los números asociados a estas alertas, como el 022-18, 026-18, 041-18, 059-18, 035-19 y 004-22, indican eventos específicos o situaciones que representan un alto riesgo para la seguridad y estabilidad del área.



Construcción propia con cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

En el año 2022, en la subregión del Valle de Aburrá, se registraron cerca de 528 homicidios con una tasa de 12.8 casos por cada 100,000 habitantes. Para el año 2023, se proyecta una reducción a aproximadamente 507 homicidios y una tasa de 12.24 por cada 100,000 habitantes.



Construcción propia con cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

En Medellín, en el año 2022 hubo 358 homicidios y se espera que en el 2023 haya 362 casos, con tasas de 13.9 y 13.96 respectivamente por cada 100,000 habitantes.

En Caldas la tasa fue de 22.45 en el 2022 y se proyecta que sea de 30.92 en el 2023, Girardota fue de 14.55 en el 2022 y se espera que sea de 23.79 en el 2023, Barbosa fue de 27.2 en el 2022 y se espera que sea de 23.7 en el 2023, y Copacabana fue de 25.37 en el 2022 y se espera que sea de 22.98 en el 2023.

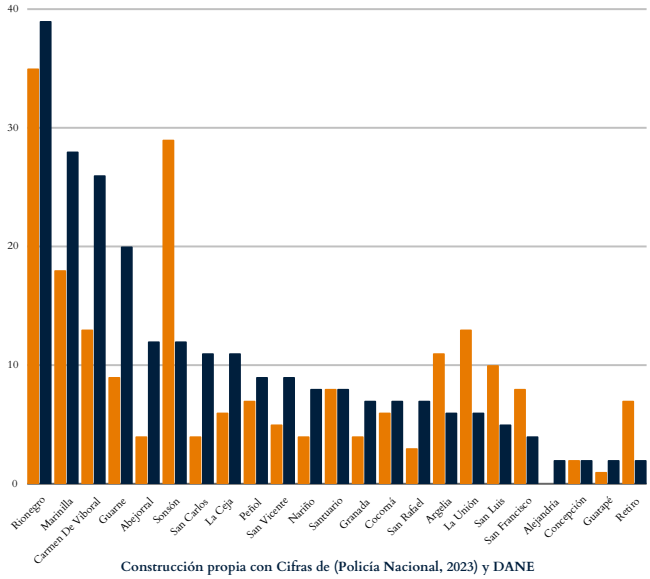
Oriente

La reconfiguración de los actores armados ilegales en la subregión del oriente de Antioquia refleja el deseo constante de estos grupos por controlar estratégicamente la zona.

En primer lugar, dichos grupos mantienen bajo su control gran parte de la población, lo que les permite ejercer su dominio e influencia. Además, cuentan con corredores estratégicos que les permiten movilizarse hacia otras subregiones del departamento.

Se ha identificado que la presencia armada ha generado conflictos tanto en zonas urbanas como rurales de municipios como Rionegro, Santuario, Marinilla, Carmen de Viboral, Guarne y San Rafael.

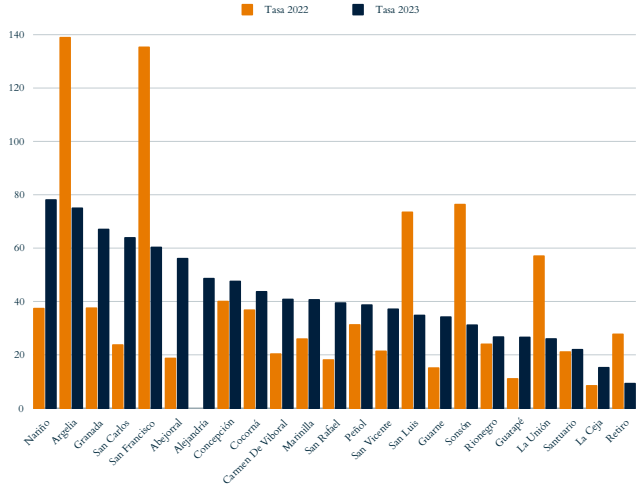
Estas zonas son controladas mediante acuerdos criminales, lo que ha generado alertas vigentes como el 026-18, 004-22 y AT Sociedad Civil.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

En los últimos cinco años, el Oriente del departamento de Antioquia ha experimentado un preocupante aumento en sus cifras y tasas de homicidios, lo que sugiere una disputa entre actores armados ilegales por el control del territorio (Corpades, 2023).

En el año 2022, se registraron 207 homicidios, con una tasa de aproximadamente 29 casos por cada 100,000 habitantes. Según proyecciones matemáticas y estadísticas para el año 2023, se espera un lamentable incremento a alrededor de 258 homicidios, lo que elevará la tasa a 36 casos por cada 100,000 habitantes.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

Esta situación contrasta con la reducción significativa de tasas y casos de homicidios en otras subregiones del departamento.

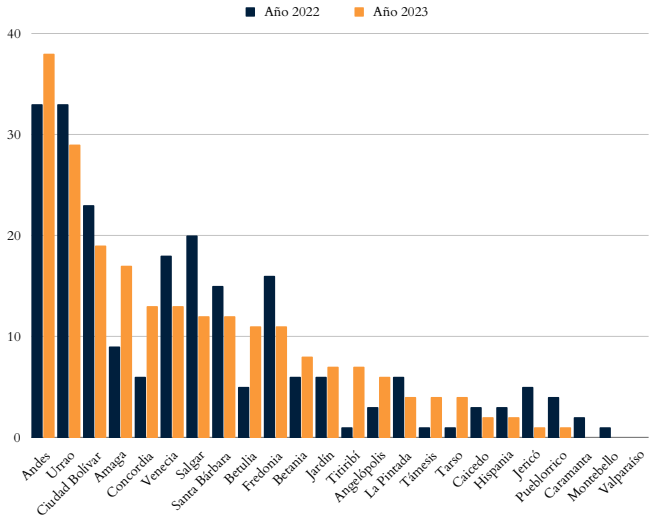
Las proyecciones estadísticas indican que el municipio de Nariño es el que presenta la tasa más alta de homicidios en el Oriente Antioqueño, pasando de 37.63 casos por cada 100,000 habitantes a 78.34. Le sigue el municipio de Argelia, que reduce su tasa de 139.19 a 75.24. En cambio, el municipio de Granada aumenta de 37.78 a 67.29, San Carlos pasa de 23.97 a 64.14, San Francisco disminuye de 135.57 a 60.56.

Hay preocupación por los focos de violencia en Rionegro, ya que se proyecta una tasa de 26.95 casos por cada 100,000 habitantes en el año 2023. Marinilla se calcula que llegará a 40.90 casos por cada 100,000 habitantes y El Carmen de Viboral alcanzará los 41.06 casos por cada 100,000 habitantes. Guarne aumentará de 15.33 a 34.44 casos por cada 100,000 habitantes.

Suroeste

El escenario de riesgo en este municipio se origina por la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo del crimen organizado San Pablo, ambos interesados en el control de las rentas ilegales derivadas del narcotráfico.

Esta disputa territorial genera un escenario de riesgo a nivel local y subregional, ya que ambas organizaciones luchan por el control de los puntos de venta de drogas tanto en áreas urbanas como rurales.



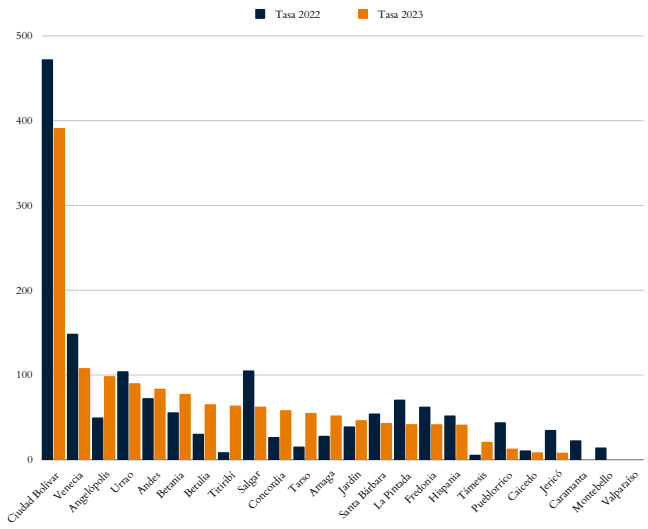
Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

En los últimos años, el suroeste del departamento ha sido afectado por una preocupante incidencia de violencia armada.

Los fenómenos de asesinatos selectivos se han vuelto una triste realidad en esta región.

Según los registros de la Policía Nacional, en el año 2022 se reportaron un total de 220 homicidios o muertes violentas en los municipios de esta área.

Desdichadamente, las estadísticas indican que esta tendencia continuará en el año 2023, proyectándose un total de 222 homicidios.



Construcción propia con cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

Esto resulta en una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de 56.39 y 56.41 respectivamente para los años que estamos estudiando. Estos números reflejan la gravedad de la situación y la preocupación que genera en la comunidad local.

En el análisis de las tasas de homicidio más altas en los municipios, destacamos que Ciudad Bolívar, aunque ha experimentado una reducción en los homicidios, aún registra una tasa alarmante de 391.28 por cada 100,000 habitantes.

Por otro lado, Venecia disminuye de 148.67 a 108.13, Angelópolis aumenta de 49.92 a 98.65, Urrao pasa de 104.42 a 90.32, Andes de 72.7 a 83.85, Betania de 55.98 a 77.72, Betulia aumenta de 30.64 a 65.51, Titiribí de 8.94 a 63.95 y Concordia de 26.84 a 58.56.

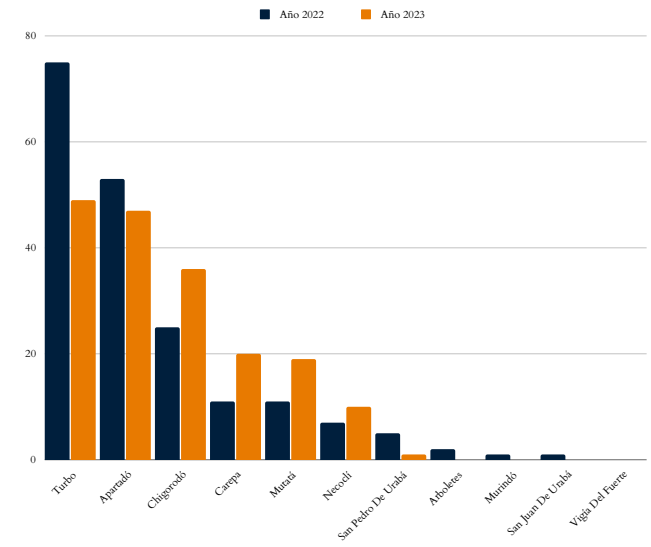
Estos datos revelan que cada uno de estos municipios presenta una tasa de homicidios superior al promedio del departamento y del país en su conjunto, lo cual indica la existencia de circunstancias particulares que rodean estos fenómenos de violencia y atentan contra el derecho fundamental a la vida.

Urabá

La subregión de Urabá se caracteriza por ser una zona de alto control por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo que afecta significativamente las dinámicas sociales y cotidianas de la población. En los diferentes municipios de esta región, el principal riesgo proviene de la presencia de actores armados ilegales y las violaciones a los derechos humanos que resultan de sus acciones contra la población.

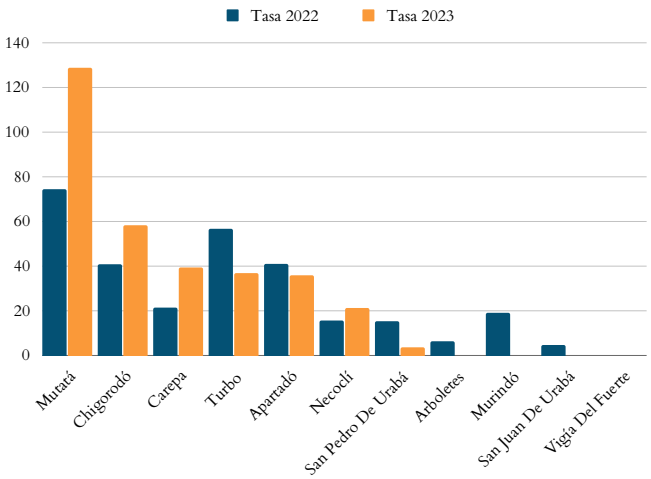
Específicamente, los municipios de Urabá que limitan con el departamento del Chocó han sido escenario de una intensa disputa territorial en los últimos años, lo cual ha generado graves afectaciones y victimización en las comunidades locales. Los homicidios selectivos en las zonas urbanas son motivo de preocupación debido a la violencia y el conflicto armado perpetrado por aquellos que ostentan el poder territorial.

En respuesta a esta situación, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha emitido una serie de alertas para Urabá, entre las cuales se encuentran las AT 022-18, 026-18, 048-18, 053-18, 064-18, 035-19, 051-20 y 004-22. Estas alertas tienen como objetivo informar a la comunidad sobre los riesgos presentes en la región y promover la adopción de medidas preventivas por parte de las autoridades y la sociedad en general. Es crucial destacar que estas alertas no solo buscan generar conciencia sobre la presencia de actores armados ilegales en la zona, sino también fomentar acciones encaminadas a garantizar la protección de los derechos humanos y promover la paz y el desarrollo sostenible en Urabá. La implementación de estrategias y políticas públicas efectivas, basadas en estas alertas, es fundamental para abordar los desafíos y construir un futuro seguro y próspero para las comunidades de esta región.



Construcción propia con cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

En general, se ha observado una reducción significativa en los homicidios en la subregión de Urabá. La cantidad de casos disminuyó de 191 a 182, lo que representa una mejora en la seguridad. Además, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes también ha disminuido, pasando de 37.78 a 33.86.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

Sin embargo, algunos municipios han presentado un aumento preocupante en sus tasas de homicidio. El municipio de Mutatá ha experimentado un incremento considerable, pasando de una tasa de 74.45 a 128.82 por cada mil habitantes. Chigorodó también ha registrado un aumento, pasando de 40.84 a 58.3. Otros municipios como Carepa han visto un incremento en su tasa de homicidios, pasando de 21.43 a 39.39.

Por otro lado, es importante destacar que algunos municipios han logrado mantener una situación favorable en cuanto a los homicidios. Municipios como Arboletes, Murindó, Juan de Urabá y Vigía del Fuerte no han registrado ningún homicidio durante el año 2023.

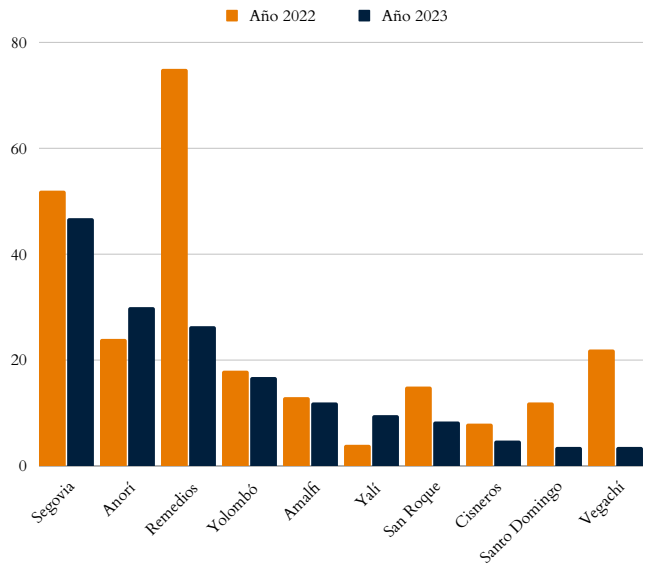
Nordeste

En la subregión del Nordeste, los niveles de riesgo están determinados principalmente por la presencia de actores armados disputando el territorio en busca de poder.

En los últimos meses, se han registrado tensiones y confrontaciones territoriales en sectores del Nordeste Bajo Cauca y el Sur de Bolívar, generando desplazamientos masivos en la zona conocida como Chicamoqué.

Además, hay alta tensión en sectores como Carrizal Mina Nueva debido a los corredores existentes. Los corredores estratégicos y la explotación de recursos naturales son intereses clave de los actores armados.

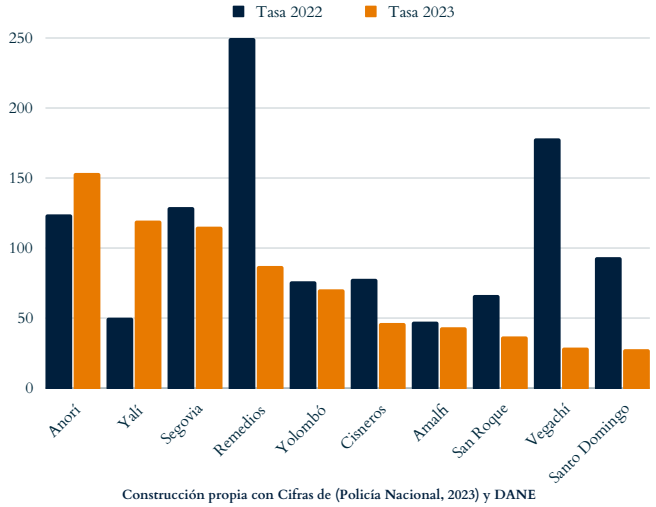
El SAT ha emitido las AT 022-18, 026-18, 052-18, 035-19 y 004-22 para esta zona y da cuenta de la consumación de los riesgos de todas las poblaciones.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

La subregión del Nordeste en el departamento de Antioquia ha experimentado una reducción en los casos de homicidios selectivos.

En el año 2022, se registraron 243 casos, mientras que en el 2023 aproximadamente se han reportado 162 casos. Esto indica una disminución en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, pasando de 117.66 a 77.73.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

Pese a esto, es importante destacar que esta subregión aún presenta la tasa de homicidios más alta en comparación con el resto del departamento y a nivel nacional.

El municipio de Anorí es el que presenta la tasa más alta en la región del Norte, aumentando de 124.04 a 153.63 casos por cada 100,000 habitantes en el año 2023.

Por otro lado, el municipio de Yalí pasa de 50.27 a 119.61 casos, mientras que Segovia disminuye de 129.25 a 115.27 casos y Remedios reduce su tasa de 249.9 a 87.19. En el caso de Yolombó, la tasa pasa de 76.26 a 70.51 casos.

Estas tasas son las más altas en comparación con otras subregiones del departamento, lo que indica un ambiente de tensión territorial posiblemente relacionado con conflictos entre actores armados y la disputa por el territorio.

Norte

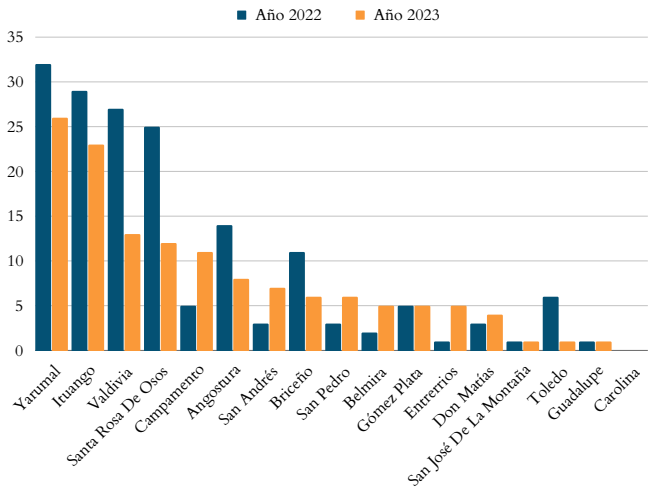
Después de la firma del Acuerdo de Paz, se produjo una reconfiguración del poder armado en los territorios afectados por la violencia, ya que otros actores ocuparon los espacios dejados por las FARC.

Esta nueva presencia armada ha desencadenado un intenso conflicto por el control territorial, lo que ha generado una revictimización generalizada de las comunidades en las regiones del departamento.

Desgraciadamente, en los últimos días, el municipio de Briceño se encuentra en una situación de alto riesgo debido a fuertes disputas entre diferentes grupos armados. Estos enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 1.000 personas, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la zona.

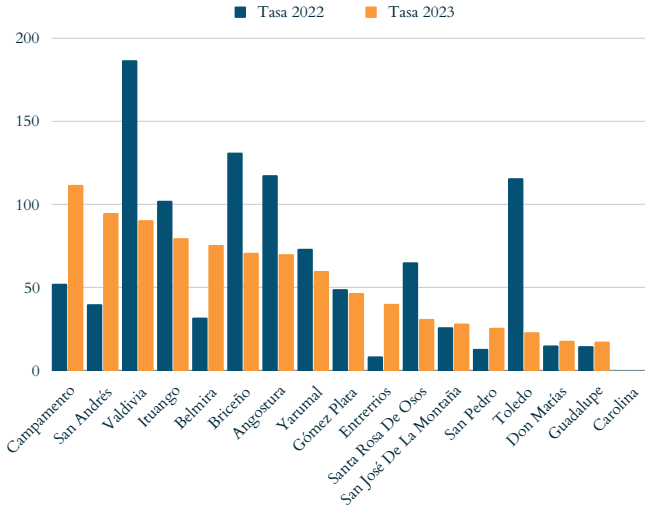
Para tener una visión más clara de la situación, es importante tener en cuenta las alertas emitidas por el SAT (Sistema de Alertas Tempranas).

En el caso del Norte de Antioquia, las alertas AT 022-18, 026-18, 029-18, 035-19, 002-19 y 004-22 evidencian la compleja realidad territorial y la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades afectadas.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

La subregión del norte de Antioquia ha experimentado una reducción significativa en los casos de homicidios. En el año 2022, se registraron 168 casos, mientras que en el 2023 se proyectan 134 casos.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

Esto implica una disminución en la tasa de homicidios, pasando de 66.13 a 52.45 por cada 100,000 habitantes. Estos datos demuestran una reducción significativa en la región.

En los municipios de la Subregión del norte de Antioquia, se han registrado aumentos preocupantes en las tasas de homicidio. Por ejemplo, en Campamento, la tasa pasó de 52.15 en 2022 a 111.67 en 2023, mientras que en San Andrés de Cuerquia aumentó de 39.84 a 94.76.

Aunque Valdivia tuvo una reducción de 186.79 a 90.44, las tasas siguen siendo altas.

Ituango pasó de 102 casos a 79.63, Dabeiba de 131.12 a 70.81, Angostura de 117.56 a 69.97, Yarumal de 73.22 a 59.86 y Gómez Plata de 48.90 a 46.6.

Estas tasas son superiores al promedio del departamento y podrían generar una alerta importante en los próximos meses o días.

Bajo Cauca

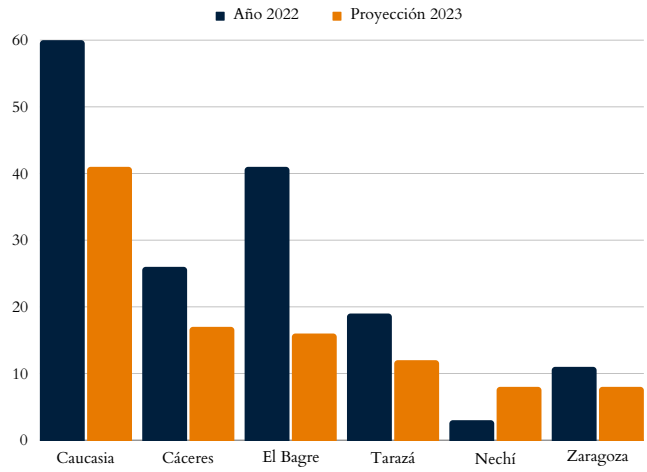
La subregión del Bajo Cauca sigue siendo una región altamente conflictiva y de gran interés para diversos grupos armados, quienes han protagonizado una disputa histórica que persiste hasta nuestros días.

Esta situación se ha intensificado especialmente en los límites con el municipio de Anorí, abarcando áreas como Valdivia, Tarazá, Cáceres y Zaragoza.

Estos enfrentamientos han dejado un alto número de víctimas en los últimos años y han generado una profunda crisis humanitaria que se agrava con cada cambio en las dinámicas de confrontación armada.

Las alertas tempranas emitidas dan cuenta no solo del aumento de la violencia, sino también de la consolidación y escalada de los riesgos presentes en la región.

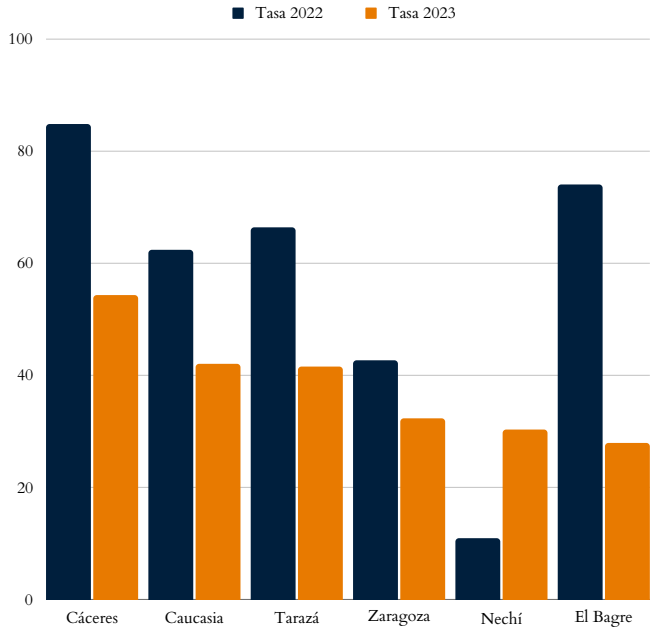
Es importante destacar que se han emitido múltiples alertas tempranas para esta subregión, entre las cuales se encuentran las AT 022-18, 026-18, 028-18, 029-18, 031-18, 020-19, 035-19, 003-19, 045-20 y 004-22.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

En el Bajo Cauca, una región marcada por la violencia y la presencia de actores armados, se han observado avances en la reducción de las tasas de homicidio.

Durante el año 2022, estas tasas alcanzaron un preocupante nivel de 60.6 casos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, al llegar el año 2023, se ha logrado una disminución significativa, situándose en 38.3 casos.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

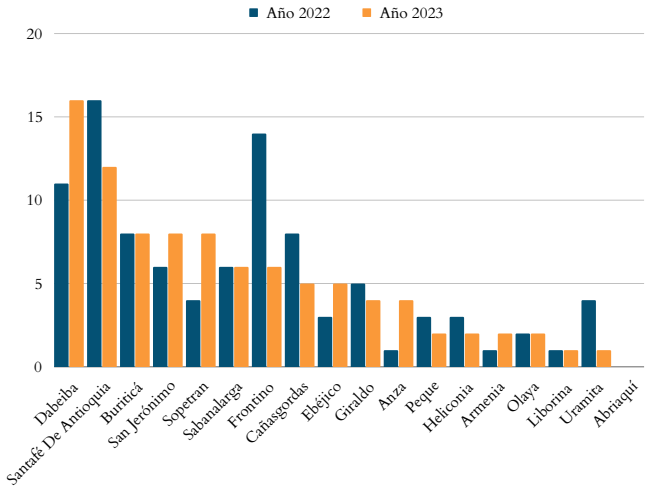
A pesar de este progreso, es importante destacar que los municipios de Cáceres, Caucasia, Tarazá y Zaragoza continúan presentando tasas de homicidio más elevadas en comparación con el resto de la región. Cáceres encabeza la lista con una tasa de 54.3 casos por cada 100,000 habitantes, seguido de cerca por Caucasia con 42.1 casos. Tarazá y Zaragoza también presentan cifras preocupantes, con tasas de 41.6 y 32.3 respectivamente.

Estas disparidades podrían explicarse por las dinámicas que persisten en estos municipios, donde actores armados mantienen un férreo control territorial.

Occidente

El escenario de riesgo se configura debido al control hegemónico que las AGC han obtenido tanto en el área urbana como rural del municipio.

La violación de derechos por parte de las AGC se convierte en un factor de riesgo significativo para las comunidades debido a sus prácticas de control poblacional, especialmente en lo que respecta a la regulación del orden social. Actualmente, existen varias alertas vigentes que incluyen los números 041-18, 026-18, 022-18, 035-19, 027-19, 009-19, 052-20 y 004-22.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

En el año 2022, los 18 municipios del occidente del departamento reportaron un total de 96 homicidios selectivos o muertes violentas.

Según las estadísticas proyectadas para el año 2023, se espera que esta cifra disminuya a 94 casos. Esto nos permite establecer una tasa de homicidios de 45.78 para el año 2022 y de 44.23 para el año 2023.

Estas cifras reflejan particularidades territoriales muy específicas que podrían determinar y explicar este fenómeno.

En la región del occidente de Antioquia, específicamente en los años 2022 y 2023, se han registrado tasas de omisión alarmantemente altas en algunos municipios.

Por ejemplo, en Buriticá la tasa ha aumentado de 150.55 a 156.77, mientras que en Dabeiba ha pasado de 68.34 a 95.96.

Otros municipios como San Jerónimo han experimentado un incremento de 63.22 a 87.57, Santa Fe de Antioquia de 98.64 a 73.31, y Peque de 91.77 a 72.90. Asimismo, se han reportado incrementos en Sabanalarga de 70.56 a 69.87, Sopetrán de 25.27 a 52.67, Cañas Gordas de 81.23 a 48.36 y Frontino de 111.07 a 47.20. Estos datos revelan una situación tensa y preocupante en varios municipios, donde se evidencia un claro fenómeno de violencia que atenta contra el derecho fundamental a la vida.

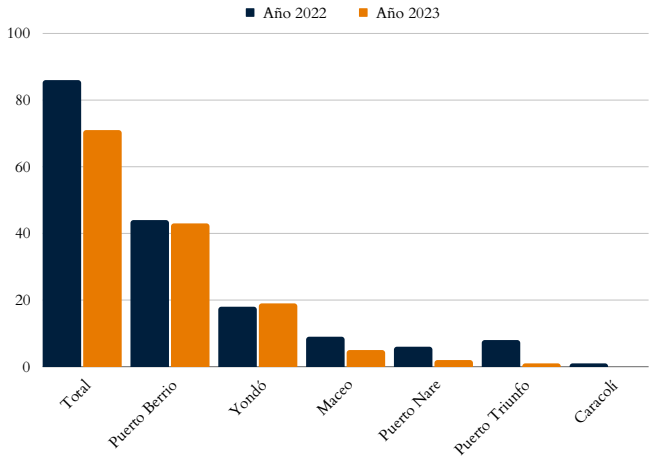
Magdalena Medio

El escenario de riesgo al que nos enfrentamos está directamente relacionado con la intensa disputa que se lleva a cabo entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos de delincuencia organizada. Estos grupos se encuentran en una constante lucha por el control absoluto de las economías ilegales que operan en nuestro país.

Dicha disputa no solo se limita al ámbito económico, sino que se encuentra íntimamente ligada al conflicto armado interno que ha afectado a Colombia durante décadas. Los grupos armados ilegales buscan, a través de la dominación de la cadena productiva del narcotráfico, asegurar su poderío y financiamiento para llevar a cabo sus actividades criminales.

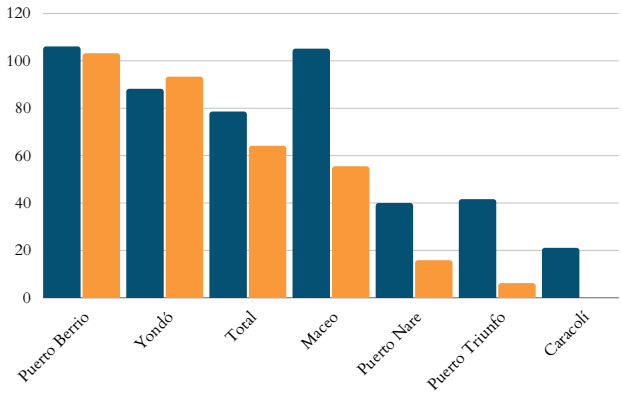
Además del narcotráfico, estas organizaciones también se dedican a otras actividades ilícitas como el cobro de extorsiones, el tráfico de armas y el robo de combustible. Estas actividades les proporcionan recursos económicos adicionales y les permiten ejercer un control aún mayor sobre territorios estratégicos.

Es importante destacar que actualmente existen diversas alertas vigentes que indican la presencia y actividad intensa de estos grupos criminales. Algunas de estas alertas son: 026-18, 022-18, 021-18, 035-19, 004-22. Estas alertas nos mantienen en constante estado de alerta y nos recuerdan la necesidad de tomar medidas para proteger nuestra seguridad y la estabilidad de nuestras comunidades.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023) y DANE

El Magdalena Medio y sus 7 municipios han sido afectados por la presencia de grupos armados, lo que ha generado una tensión territorial debido a disputas relacionadas principalmente por el control de las economías ilícitas.



Durante el año 2022, se registraron 86 homicidios, lo que resultó en una tasa de 71.61 casos por cada 100,000 habitantes. Para el año 2023, se proyecta una cifra de 71 homicidios y una tasa de 64.15.

Aunque hay una reducción, la tasa sigue siendo alta en comparación con los niveles departamentales y nacionales, lo cual es preocupante ya que podría extenderse en los próximos días o meses.

En el municipio de Puerto Berrío, se registra la tasa más alta de homicidios en el Magdalena Medio, disminuyendo de 106.8 a 103.21 casos por cada 100,000 habitantes. En Yondó, la tasa pasó de 88.21 a 93.33. Por otro lado, en Maceo, la tasa disminuyó significativamente de 105.15 a 55.52, lo cual es una buena noticia al representar una reducción del 50%.

En el municipio de Puerto Nare, la tasa bajó de 40.02 a 15.87, mientras que en Puerto Triunfo disminuyó de 41.62 a 6.19. Afortunadamente, durante el año 2023 no se presentaron homicidios en el municipio de Caracolí.

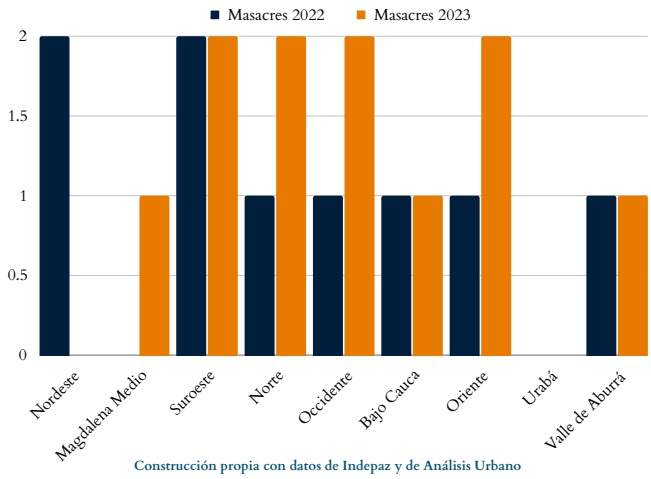
Masacres en Antioquia 2022-2023

Las masacres continúan siendo una dolorosa realidad en nuestro país, y el departamento de Antioquia no ha sido ajeno a esta tragedia.

Según los datos recopilados por Indepaz y otros de la Agencia de Prensa análisis Urbano-Corpades, durante el año 2022 se registraron un total de 96 masacres en Colombia, de las cuales 9 tuvieron lugar en Antioquia.

Estas cifras ya eran alarmantes, pero lamentablemente, el año 2023 no ha traído mejoras significativas. Hasta ahora, se han reportado 90 masacres en todo el país, y de ellas, 11 se han registrado nuevamente en el departamento de Antioquia.

Es importante destacar que estas masacres no están concentradas en un solo municipio o región dentro de Antioquia. Según el consolidado de datos entre los años 2022 y 2023, las masacres han ocurrido en diferentes zonas del departamento. Los municipios más afectados son el suroeste, norte, occidente, oriente, nordeste, bajo cauca, Valle de Aburrá y Magdalena medio, en ese orden.



Construcción propia con datos de Indepaz y de Análisis Urbano

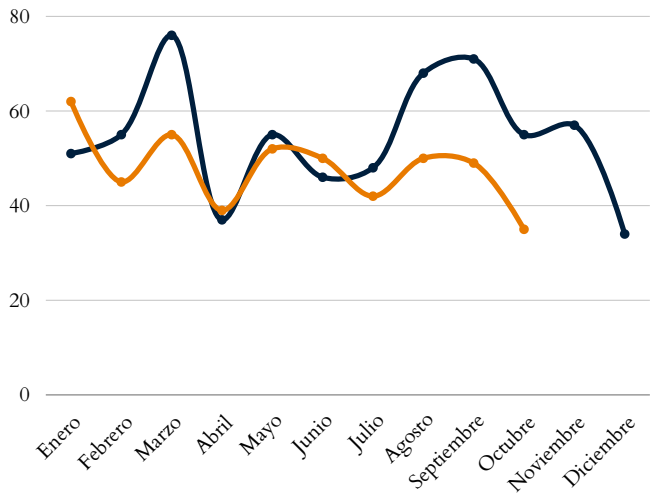
Estos números son alarmantes y reflejan una situación de violencia que afecta profundamente a nuestra sociedad. Detrás de cada una de estas masacres hay historias desgarradoras de vidas perdidas y comunidades destrozadas.

Casos de Personas Dadas por Desaparecidas

Basado en la información recopilada en el Observatorio de Violencia de Medicina Legal, es preocupante que en Antioquia se registren cerca del 10% de los casos de personas desaparecidas en Colombia.

Hasta el mes de octubre, las estadísticas de desaparición forzada muestran una tendencia constante hacia la reducción, con una disminución promedio mensual del 15% en el número de casos.

Casos de desapariciones por mes

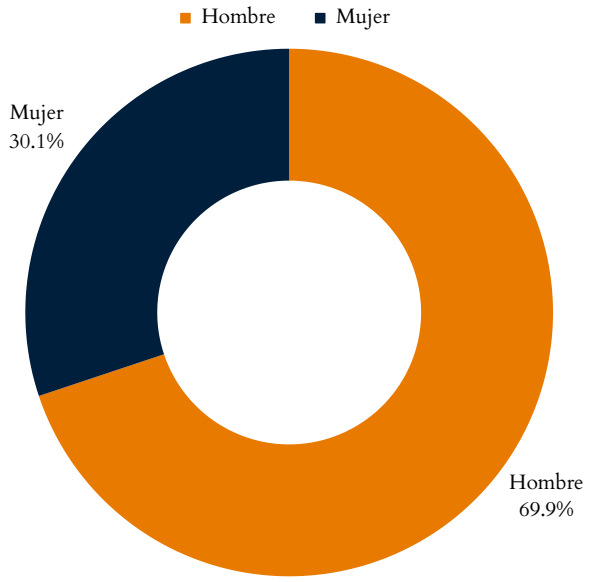


Construcción Propia con cifras del (Medicinal Legal , 2023)

Este es un indicio alentador en medio del escenario de violencia que ha afectado a la población es un elemento que en términos de la línea de tiempo de la violencia basada en la desaparición, sugiere que hacia finales de diciembre se espera una reducción significativa en los casos.

Desapariciones por género

En el periodo comprendido entre el año 2022 y el 31 de octubre del año 2023, se han registrado un total de 1132 desapariciones en el departamento de Antioquia.



Construcción Propia con cifras del (Medicinal Legal , 2023)

De manera preocupante, el 70% de estos casos corresponden a hombres, mientras que el 30% afecta a mujeres.

Esta desproporción evidencia un fenómeno alarmante que revictimiza a la condición femenina y pone de relieve un preocupante incremento en la violencia sistemática dirigida hacia las mujeres en la región.

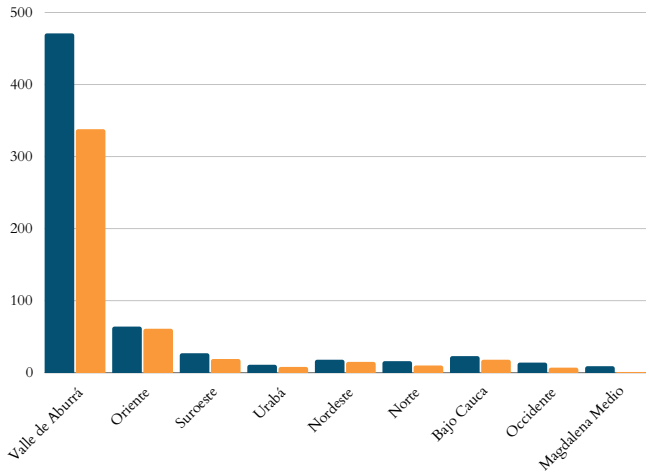
Estos datos revelan la urgente necesidad de abordar y combatir esta problemática, garantizando la seguridad y protección de todas las personas, especialmente las mujeres en Antioquia.

Desapariciones por Subregión

En el año 2022 hubo 653 casos y hasta el 30 de octubre de 2023 ya se han reportado 477 casos en este departamento.

Es importante analizar esta cifra para comprender por qué algunos actores armados recurren a prácticas como la desaparición forzada, la trata de personas y el reclutamiento, ya que estas acciones tienen un impacto devastador en las familias y en la sociedad en general.

Es alentador observar una tendencia descendente en las cifras de desapariciones en el departamento, a nivel nacional.



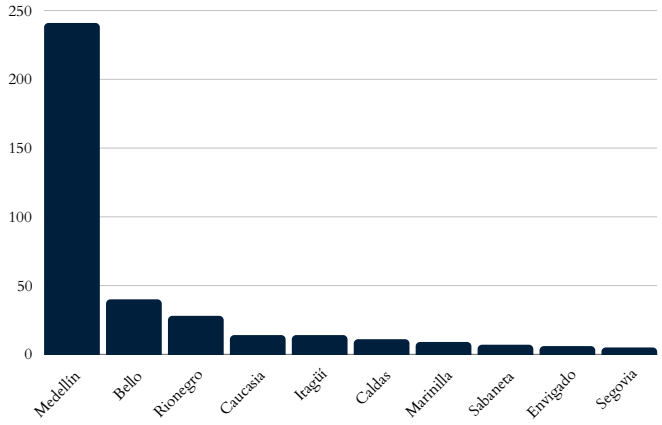
Construcción Propia con cifras del (Medicinal Legal , 2023)

No obstante, al analizar la distribución geográfica de estos casos, se revela una preocupante concentración en el Valle de Aburrá, que registra el 70.9% de los casos.

Le sigue la región del Oriente, con el 12.8% de los casos, seguido del Suroeste con un 4%, Bajo Cauca con el 3.8%, Norte con el 2.1%, y Nordeste con el 3.1%.

Los 10 municipios con más casos de personas dadas por desaparecidas

Al analizar de forma detallada los datos, es evidente que Medellín sigue siendo la ciudad donde se concentra mayormente el preocupante fenómeno de las desapariciones. Según registros, se han reportado un total de 241 casos en la ciudad.



Construcción Propia con cifras del (Medicinal Legal , 2023)

Le siguen en la lista de los 10 municipios con más casos Bello, con 40 desapariciones; Rionegro, con 28; Caucasia e Itagüí, ambos con 14 casos cada uno; Caldas, con 11; Marinilla, con 9; Sabaneta, con 7; Envigado, con 6; Segovia, Carmen de Viboral y Guarne, todos ellos con 5 casos cada uno.

Estos números revelan la necesidad de implementar medidas específicas y focalizadas en estas localidades para abordar y prevenir las desapariciones, así como brindar apoyo a las familias afectadas por esta dolorosa realidad.

El resto de las regiones presentan proporciones mucho menores. Estos datos evidencian la necesidad de focalizar esfuerzos y recursos en las zonas donde la incidencia de desapariciones es más alta, para abordar esta problemática de manera efectiva y proteger a la población afectada.

Homicidios personas defensoras de los derechos humanos en Antioquia 2022-2023

La ONG Front Line Defenders publicó un informe alarmante sobre el aumento de homicidios contra defensores de derechos humanos en todo el mundo. Según el informe, en 2022 se registraron 401 asesinatos en 26 países, siendo Colombia el país con mayor número de casos, seguido de Ucrania, México y Brasil (Urbano Análisis SAS, 2023).

Uno de los fenómenos que ha despertado una profunda sensación de desesperanza en Colombia es el alarmante número de asesinatos a Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

Según las cifras proporcionadas por Indepaz, durante el año 2022 se registraron un total de 189 casos de homicidios a defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

Estas cifras revelan una realidad desgarradora y preocupante. El 12.7% de estos asesinatos tuvieron lugar en el departamento de Cauca, el 11.6% en Nariño y el 10.6% en Antioquia.

Estos porcentajes evidencian un alto impacto en estas regiones, donde la violencia, la presencia de actores armados y las disputas territoriales son factores determinantes.

Es importante destacar que estas dinámicas violentas están estrechamente relacionadas con las economías ilícitas y los actores armados ilegales que operan en estas zonas.

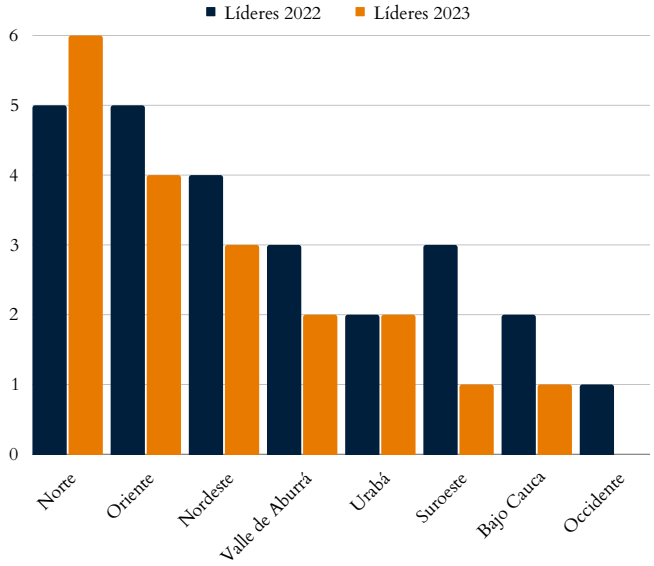
La defensa de los Derechos Humanos se convierte en un desafío aún mayor debido a la influencia directa que estos grupos ejercen sobre las realidades territoriales.

Las personas defensoras de derechos humanos son valientes individuos que dedican sus vidas a luchar por la justicia, la igualdad y la protección de los más vulnerables.

Sin embargo, su labor se ve obstaculizada por la violencia sistemática y la impunidad que rodea estos crímenes.

El fenómeno de la violencia contra las personas defensoras de los Derechos Humanos ha alcanzado niveles alarmantes en diversas regiones de Antioquia.

Durante el año 2022, se registraron un total de 25 homicidios en el departamento, y el Oriente de Antioquia fue la zona más afectada, representando el 20% de estos casos.



Construcción propia con cifras de Indepaz, Corpades y Análisis Urbano

Asimismo, el norte de Antioquia también experimentó un alto índice de violencia, con un 20% de los homicidios ocurridos en esa región durante el mismo período. En el noreste, este porcentaje disminuyó al 16%, mientras que en el Valle de Aburrá y el suroeste representaron el 12% cada uno. El bajo cauca se vio afectado por el 8% de los homicidios, mientras que las otras subregiones experimentaron una menor intensidad en comparación.

De la misma forma, el norte de Antioquia también experimentó un alto índice de violencia, con un 20% de los homicidios ocurridos en esa región durante el mismo período. En el noreste, este porcentaje disminuyó al 16%, mientras que en el Valle de Aburrá y el suroeste representaron el 12% cada uno. El bajo cauca se vio afectado por el 8% de los homicidios, mientras que las otras subregiones experimentaron una menor intensidad en comparación.

Durante el año 2023, la violencia contra personas defensoras de los Derechos Humanos en Antioquia alcanzó su punto más crítico en el Norte de la de Antioquia, representando el 32% de los homicidios registrados.

Le sigue la región oriental con el 21%, mientras que Nordeste se presentaron el 16%, Valle de Aburrá el 10% y el Urabá tuvo un 11%; las demás subregiones presentaron una menor incidencia.

Es importante destacar que en el Magdalena Medio no se reportaron homicidios contra defensores de derechos humanos durante ese año, y en el occidente no hubo casos registrados.

Esta situación refleja la urgente necesidad de proteger a quienes luchan por los derechos fundamentales en Antioquia y tomar medidas efectivas para frenar esta violencia sistemática.

Alerta por el riesgo del desmonte de esquemas de seguridad a líderes sociales

La decisión de la Unidad Nacional de Protección de desmantelar masivamente los esquemas de seguridad de cientos de líderes y lideresas sociales en Colombia es una medida temeraria que pone en riesgo la vida e integridad de estas personas (Corpades, 2023).

La alta tasa de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en el país y la eliminación de esquemas de protección a pesar de las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo son motivo de preocupación.

Es crucial que las autoridades estatales tomen en cuenta los análisis de riesgo y conflictividad del país al tomar decisiones sobre medidas de protección.

El presidente de Colombia debe asumir su responsabilidad y garantizar que se implementen políticas integrales que fortalezcan la protección de estos defensores, brindándoles seguridad y respaldo necesario para que puedan continuar con su valiosa labor sin temor a represalias.

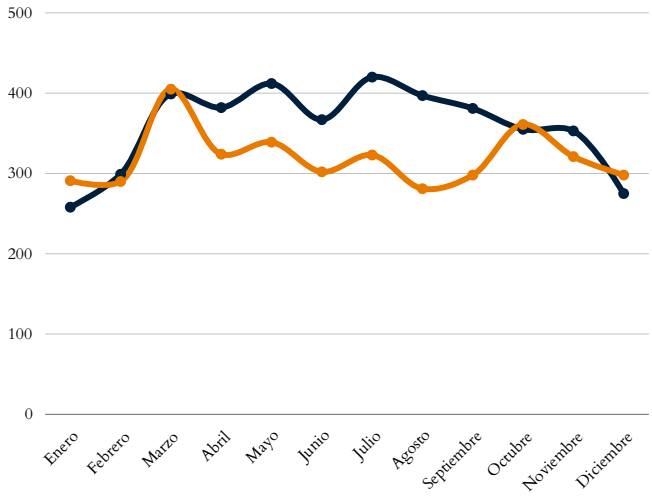
Amenazas

Las amenazas en el departamento de Antioquia parecen estar directamente relacionadas con estrategias de control y consolidación territorial por parte de grupos criminales.

Estos fenómenos de violencia se presentan de diversas formas, ya sea a través del uso de armas de fuego, armas cortopunzantes o métodos no violentos como panfletos y redes sociales.

Estas amenazas pueden tener un impacto significativo en las características y dinámicas de los territorios afectados, y podrían indicar la presencia y la influencia del crimen organizado en la región.

Sería necesario realizar un análisis detallado para comprender mejor estos fenómenos y sus implicaciones a nivel social, político y económico.



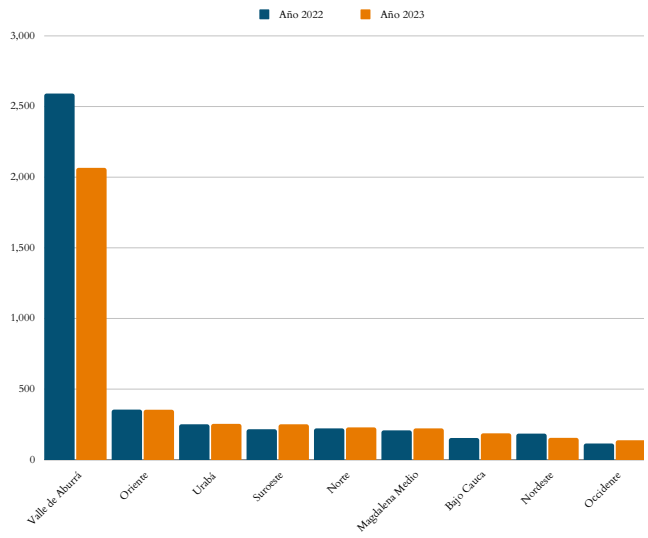
Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023)

Durante el año 2022, el departamento de Antioquia registró un total de 4,298 casos de amenazas, con un promedio mensual de 358. El mes de julio fue el más crítico en términos de incidencia.

En lo que va del año 2023, hasta octubre, ya se han reportado 3214 amenazas. Considerando la tendencia estadística, se estima que para finales de diciembre se alcanzarán las 3,857 amenazas, lo que representa una reducción del 10% en todo el departamento.

Amenazas por subregión

Según los datos del mapa regional, el Valle de la Aburrá representa el 53.6% de los casos de amenazas, seguido por los municipios del oriente de Antioquia con un 9.2%, y en tercer lugar se encuentra Urabá con un 6.6%.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023)

Según los datos del mapa regional, el Valle de la Aburrá representa el 53.6% de los casos de amenazas, seguido por los municipios del oriente de Antioquia con un 9.2%, y en tercer lugar se encuentra Urabá con un 6.6%.

Otros porcentajes incluyen el suroeste con un 6.5%, el norte con un 5.9%, el Magdalena Medio con un 5.8% y el Bajo Cauca con un 4.9%.

Al analizar las formas y estrategias de control territorial de los actores armados, se puede identificar que este patrón se debe principalmente a causas relacionadas con las economías ilícitas, así como al dominio territorial y la imposición de normas y estrategias de conducta por parte de los grupos armados hacia la ciudadanía.

Desplazamientos masivos

El fenómeno del desplazamiento forzado en Antioquia ha impactado de manera significativa a diferentes regiones del departamento. Se han registrado alrededor de 11 casos masivos que han afectado a aproximadamente 4525 personas, pertenecientes a 2316 familias.

Fecha	Municipio	N° Afectados	N° Familias
19/04/2023	Frontino	48	11
14/04/2023	Segovia	40	14
1/06/2023	Segovia	77	26
5/08/2023	Segovia	1000	1000
23/08/2023	Cáceres	2217	815
22/09/2023	Segovia	79	
14/09/2023	Briceño	48	38
29/10/2023	Segovia	43	12
9/11/2023	Anorí	107	30
22/11/2023	Briceño	55	20
30/11/2023	Briceño	811	350

Construcción propia con cifras (OCHA, 2023)

Principalmente, las zonas más afectadas han sido el suroeste, nordeste, bajo cauca y norte de Antioquia. Estas comunidades han sufrido las consecuencias de tensiones territoriales entre grupos armados que continúan disputándose el control de estos territorios, lo cual ha generado un ambiente de miedo y preocupación generalizada entre la población civil.

Es evidente que los focos de violencia en el departamento de Antioquia se encuentran concentrados en aquellas zonas donde existe una feroz disputa por proyectos mineros y corredores estratégicos.

La ubicación de estos proyectos extractivitas representa no solo intereses económicos y políticos, sino también la posibilidad de garantizar la movilidad territorial para los diferentes actores armados ilegales envueltos en estos conflictos.

Es en estas áreas de disputa donde la población civil se convierte en la víctima más vulnerable y afectada por las consecuencias devastadoras de la violencia.

Cada vez que estalla un enfrentamiento, son los habitantes de estas comunidades quienes pagan el precio más alto, viéndose atrapados en medio de un fuego cruzado que amenaza su integridad física y psicológica.

La presencia constante de grupos armados, que luchan por controlar estos territorios estratégicos, genera un clima de temor y zozobra generalizada entre la población civil. Las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus tierras y sus raíces, buscando desesperadamente refugio en otros lugares donde puedan encontrar un mínimo de seguridad.

El caso más reciente de Briceño, muestra cómo después de intensos combates entre grupos armados se ha generado una crisis humanitaria con cientos de personas desplazadas y la trágica pérdida de un líder social. Se estima que más de 900 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia (Hora 13, 2023).

La extorsión como dinámica de las economías ilegales

Las extorsiones son esenciales para los grupos armados debido a que les permiten obtener recursos financieros para financiar sus operaciones, adquirir armas y mantener su infraestructura.

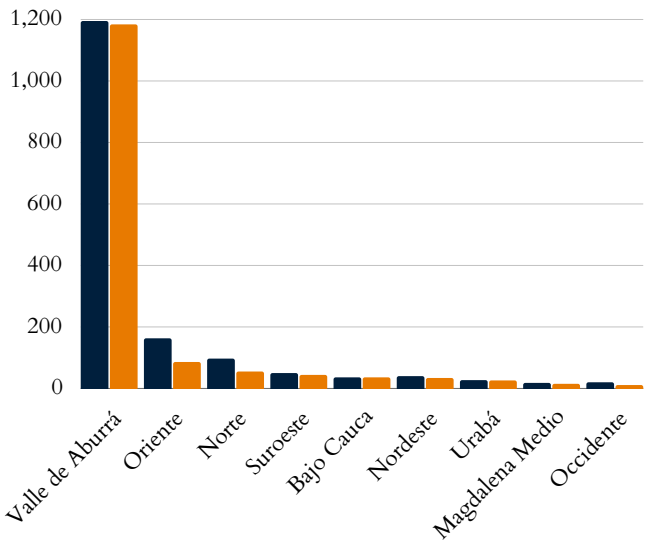
Conjuntamente de la obtención de fondos, las extorsiones también cumplen una función de control social en las áreas en las que estos grupos tienen presencia.

Cuando un grupo armado extorsiona a una comunidad, no solo busca obtener dinero, sino establecer un control y dominio sobre esa población.

El miedo generado por las extorsiones hace que las personas se vean obligadas a cumplir con las demandas de los grupos armados para asegurar su seguridad y la de sus familias.

Al mismo tiempo, las extorsiones también pueden generar una sensación de dependencia hacia los grupos armados, en la medida en que algunas comunidades se ven forzadas a recurrir a ellos para resolver conflictos o incluso como una forma de sustento económico.

Extorsiones por subregión



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023)

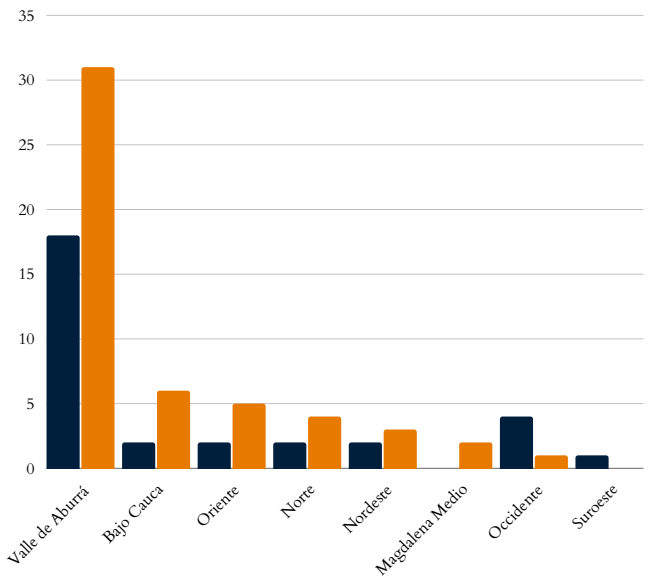
En cuanto a las extorsiones en Antioquia, durante el año 2022 se presentaron 1646 denuncias por este delito. Sin embargo, en el año 2023 se registró una reducción de 155 casos, lo que indica una disminución en la incidencia de extorsiones en la región. Es importante destacar que el 80% de estos casos ocurren en el Valle de Aburrá, siendo esta la zona más afectada.

Le sigue el oriente antioqueño con aproximadamente el 6% de los casos reportados, mientras que las regiones del norte, suroeste, bajo cauca y nordeste presentan porcentajes menores de incidencia, con el 4%, 3%, 2.4% y 2% respectivamente.

Secuestros por subregiones

En los últimos años, el departamento de Antioquia ha experimentado una preocupante tendencia en cuanto a los secuestros, los cuales representan una violación a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario.

Estos secuestros suelen ser de naturaleza extorsiva y están vinculados a las dinámicas de economías ilícitas de los actores armados. Sin embargo, también se han identificado casos en los que forman parte de llamados de cuentas entre dichos actores.



Construcción propia con Cifras de (Policía Nacional, 2023)

Según las cifras del año 2022, se registraron 31 casos de secuestros en Antioquia, principalmente en el valle de la burrada. Sin embargo, durante el año 2023, estas cifras han aumentado significativamente, alcanzando un total de 52 casos hasta octubre. Esto representa un incremento del 67.7% en comparación con años anteriores.

Este aumento alarmante de los secuestros plantea una seria preocupación en materia de seguridad y violencia en la región.

En cuanto a la distribución geográfica de los casos de extorsión, se destaca que el 60% ocurre en el Valle del Aburrá, seguido por el Bajo Cauca con el 11.5% y el Oriente con el 10%.

Es preocupante observar que estas cifras están experimentando un aumento considerable en todas las regiones.

Específicamente, en el Valle del Aburrá, se registró un incremento cooperativo del 72.2% entre el 2022 y el 2023. En el Bajo Cauca, el aumento fue del 12%, mientras que en el Oriente alcanzó el 150%. En el norte, se observó un incremento del 100%, y en el nordeste, del 50%.

Estos datos revelan un patrón consistente que coincide con los elementos previamente analizados, relacionados con conflictos, disputas territoriales y formas de control presentes en las diferentes regiones.

Esta tendencia alarmante subraya la necesidad de tomar medidas efectivas para abordar la problemática de los secuestros y la extorsión en todas estas zonas.

La cooperación entre las autoridades y la sociedad civil es fundamental para garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos en cada región afectada.

Paz Total, Paz Urbana: Retos y desafíos

La búsqueda de la paz urbana ha sido una de las mayores preocupaciones y desafíos del país.

Los esfuerzos del gobierno y la comunidad internacional por lograr la pacificación nacional y la reducción de la crisis humanitaria son innegables.

Sin embargo, aunque se han logrado importantes avances, todavía existen debilidades institucionales que han dejado espacios vacíos en el Norte, Nordeste y en el Oriente, que son los nuevos focos de violencia territorial donde se está extendiendo el conflicto por el control del territorio.

Esto se debe en gran parte a que la acción u omisión frente a la fiscalía general de la nación, la procuraduría y la fuerza pública han sido insuficientes.
A pesar de los esfuerzos realizados, la falta de coordinación y de recursos ha impedido que se pueda garantizar una seguridad duradera en la región.

Resulta de vital importancia realizar un análisis detallado de esta situación, ya que nos puede ayudar a determinar y tomar decisiones frente a cómo enfrentar estas dinámicas de violencia. Es indispensable que se implementen estrategias y políticas públicas que permitan avanzar en la construcción de una paz duradera en la región.

La reducción de la crisis humanitaria en algunas zonas demuestra que el diálogo y la concertación son herramientas fundamentales para lograr la paz y la estabilidad en la región.

Sin embargo, es necesario que dichos diálogos sean acompañados por una adecuada inversión y por políticas que permitan el acceso a oportunidades para la comunidad, como la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida.

En este sentido, la sociedad civil, los organismos internacionales, los actores armados y el gobierno deben trabajar juntos y coordinadamente en el diseño e implementación de políticas que permitan la construcción de una paz duradera en la región.

Es fundamental también que la comunidad sea protagonista en este proceso, a través de la praxis política y social para garantizar la inclusión y el respeto de los derechos humanos. La región de Antioquia necesita verdaderas soluciones de largo plazo que permitan consolidar la paz urbana y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En conclusión, el tema de la paz urbana y los escenarios de diálogo entre el gobierno nacional y los diferentes actores armados del país en sus regiones del departamento de Antioquia han sido fundamentales para la reducción de la crisis humanitaria en algunas zonas.

Fuera de las debilidades institucionales por acción u omisión frente a la fiscalía general de la nación, la procuraduría y la fuerza pública han dejado unos espacios vacíos en el norte, este y en el Oriente, que son los nuevos focos de violencia territorial donde se está extendiendo el conflicto por el control del territorio.

Es importante hacer un análisis detallado de esta situación y trabajar juntos para la construcción de una paz duradera en la región de Antioquia.

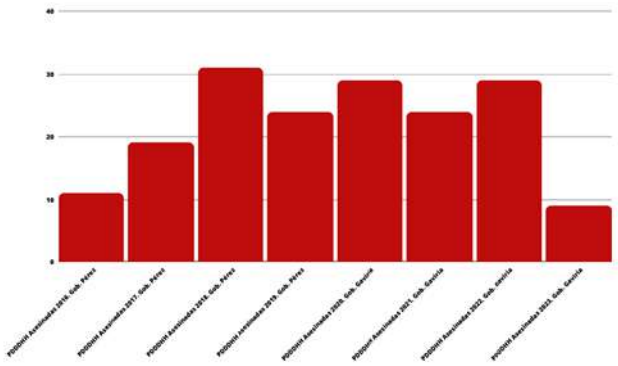
La sociedad civil, los organismos internacionales y el gobierno deben trabajar coordinadamente en el diseño e implementación de políticas que permitan la consolidación de la paz urbana y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

El papel de la negligencia de las autoridades

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria ha mantenido un nivel muy crítico sobre la paz total y le atribuye el riesgo para que convierta en una trampa con la que se fortalecen los grupos armados (RCN, 2023).

Olvida el Gobernador Gaviria que en Colombia, el gobernador desempeña un papel fundamental como jefe de la administración seccional y representante legal del departamento, tal como lo establece el artículo 303 de la Constitución Política.

Esta figura política posee una serie de responsabilidades y atribuciones que buscan garantizar el adecuado funcionamiento del gobierno departamental, incluyendo el orden público, por lo tanto existe una responsabilidad de él frente a la situación que viene recrudeciéndose desde el que asumió el cargo.



Tomado de: (Fundación Sumapaz, 2023)

Ciertamente, la presencia de la violencia en Colombia en un fenómeno recurrente que involucra a diferentes actores y departamentos del país. Uno de los departamentos más afectados es Antioquia, en el cual la omisión y la impunidad han permitido una consolidación de la violencia.

Es claro que en la medida que se fortalecen, avanzan y se consolidan territorialmente los actores ilegales quedan en tela de juicio el papel de los organismos de la fuerza pública y los organismos de inteligencia por no prevenir y combatir la violencia, lo que ha permitido el avance y la consolidación de los actores armados ilegales en la zona.

La falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado ha sido un factor que ha agravado la situación, contribuyendo a la falta de control en los vacíos territoriales que son rápidamente copados por la ilegalidad.

En este escenario, distintos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación ante la falta de medidas efectivas para contener la violencia y proteger a la población.

Algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos han denunciado que la violencia en Antioquia se alimenta de las disputas por el control territorial y la explotación de recursos naturales, especialmente en zonas rurales, esas denuncias terminan en los archivos y las papeleras de las oficinas correspondientes.

No obstante, la falta de respuestas adecuadas de parte del Estado ha generado un ambiente de desconfianza y frustración en la población, que se siente abandonada frente a la violencia y la impunidad.

En el ambiente de seguridad de las comunidades rurales y urbanas, se ha generado un fuerte cuestionamiento hacia la fuerza pública. El mayor peligro radica en la omisión de la acción por parte de las autoridades, lo cual ha dado lugar a diversas crisis en el departamento.

Los recientes sucesos ocurridos en Briceño Antioquia, El Bajo Cauca, Oriente y el Nordeste, son un claro ejemplo de cómo los grandes ejércitos de los actores ilegales continúan movilizándose con total impunidad en vastas zonas rurales sin ser detectados por las autoridades competentes.

Mientras tanto, la comunidad percibe una inacción por parte de la VII División y el IV Brigada del Ejército, lo que determina un mayor riesgo para la seguridad en el territorio.

Es preocupante que no se estén llevando a cabo acciones ofensivas contra ningún grupo armado en el departamento. Esta situación agrava aún más las difíciles condiciones que enfrentan diariamente las comunidades. Tanto el gobierno nacional como el departamental no han tomado medidas contundentes para garantizar el retorno seguro de los desplazados y prevenir nuevos desplazamientos.

Por otro lado, resulta lamentable constatar que el Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, se han convertido más en un instrumento político-electoral que en verdaderos entes encargados de ejercer control y velar por el cumplimiento de la ley. Mientras estas instituciones no cumplan adecuadamente con su función en pro de la democracia, los caminos de la ilegalidad seguirán fortaleciéndose.

Es fundamental que se tomen medidas efectivas y contundentes para garantizar la seguridad de las comunidades, así como fortalecer el rol del Ministerio Público como un verdadero ente de control y justicia. Solo así será posible avanzar hacia un ambiente de seguridad y tranquilidad para todos los ciudadanos.

Conclusiones generales

En el informe se evidencia que tanto el país como el departamento continúan enfrentando conflictos territoriales debido a la presencia de grupos armados y los vacíos institucionales existentes. Además, se han registrado graves violaciones a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario en estas zonas.

No obstante, es importante destacar que se ha observado una reducción significativa en las cifras de homicidios, lo cual podría ser un indicio del avance hacia la paz total en el país. Sin embargo, persisten preocupaciones en algunas regiones, como el Oriente del departamento, donde la presencia de grupos armados aún genera inquietud y contribuye al aumento de la violencia.

Es necesario mencionar que, aunque se han evidenciado tendencias a la reducción en la desaparición forzada, este fenómeno sigue presentándose de manera sistemática en los territorios afectados. Esto refleja la importancia de seguir trabajando en la protección y garantía de los derechos humanos en estas áreas.

La tasa de homicidios es un indicador relevante que nos permite identificar y ubicar las zonas donde el derecho a la vida está siendo más atacado.

Esto resalta la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y promover acciones para prevenir y abordar la violencia en estas áreas específicas.

Es importante resaltar que las desapariciones han mostrado un comportamiento de reducción muy significativo en general.

Sin embargo, aún persisten casos en el Oriente del departamento, particularmente en el nordeste.

En cuanto a los defensores y las defensoras de Derechos Humanos, se ha registrado una reducción cercana al 20%. Estos datos corresponden al corte del informe hasta octubre, con algunas proyecciones hasta diciembre. Es importante tener en cuenta que se espera que esta tendencia de reducción continúe.

Es crucial destacar que existe un foco de violencia sociopolítica en el norte y el Oriente del departamento, lo cual no implica que desaparezca en otras regiones.

A raíz de este análisis, se estima que posiblemente se intensifique la violencia sociopolítica contra líderes ambientales en el suroeste, en el marco del nuevo escenario político.

Estas conclusiones indican que si bien hay avances notables hacia un escenario favorable para la paz, aún persisten desafíos y preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos.

Es fundamental seguir trabajando para prevenir y abordar la violencia en todas las regiones afectadas y proteger a aquellos que defienden los derechos fundamentales.

Según las proyecciones estadísticas, se ha registrado una reducción en los casos de extorsiones en todas las regiones del departamento de Antioquia.

Esta disminución brinda una oportunidad para que las autoridades implementen medidas preventivas y establezcan protocolos y parámetros que eviten la ocurrencia de nuevos eventos similares.

Sin embargo, en cuanto al tema de los secuestros, los datos no son alentadores. Se ha observado un aumento significativo en este fenómeno, especialmente en las subregiones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Oriente. Estas áreas están siendo impactadas por el incremento de casos de secuestro, lo cual plantea un desafío importante para las autoridades y exige una respuesta contundente.

Este panorama revela la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de seguridad en el departamento de Antioquia, especialmente en las subregiones mencionadas. Es vital que se implementen acciones efectivas para combatir y prevenir los secuestros, garantizando la protección de la población y la tranquilidad en estas áreas.

Las autoridades deben redoblar esfuerzos y trabajar en colaboración con la comunidad para identificar las causas subyacentes de este aumento en los secuestros y tomar medidas concretas para abordarlas. La seguridad ciudadana es un derecho fundamental que debe ser preservado, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para lograrlo.

En la búsqueda de la paz total, tanto a nivel urbano como en el contexto de diálogos jurídicos y mesas de negociación entre el gobierno nacional y los diferentes actores armados, se vislumbra un escenario en el que la sociedad civil debe apostar y buscar mecanismos para incidir de manera drástica en las decisiones.

Es imperativo reconocer que la presencia de estos actores armados en Antioquia y en el resto del país plantea un desafío que debe ser abordado por toda la sociedad.

Para lograr una paz duradera, es necesario involucrar a la población en la toma de decisiones y garantizar su participación activa en la construcción de un futuro pacífico.

En términos de conflictos, es importante hacer un llamado tanto a los grupos armados que están violando los acuerdos de paz, como a aquellos actores armados que continúan perpetrando acciones violentas contra la población en estos focos territoriales.

Es fundamental atender estas dinámicas y trabajar incansablemente para alcanzar un escenario de paz total para el país.

La paz total es un objetivo que merece todo nuestro esfuerzo y compromiso. Implica superar las diferencias y trabajar juntos para construir una sociedad justa y libre de violencia.

Es necesario que todos los sectores de la sociedad se unan en este propósito, desde las instituciones gubernamentales hasta los ciudadanos comunes, para lograr una transformación profunda y duradera.

La búsqueda de la paz implica enfrentar desafíos complejos, pero también brinda oportunidades para construir un futuro mejor.

Es momento de dejar atrás las armas y promover el diálogo, la negociación y el respeto por los derechos humanos. Solo así podremos alcanzar la paz total que tanto anhelamos y que nuestro país merece.

Metodología

La metodología del informe, se emplea una combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos, siguiendo una línea periodística de análisis de información.

La metodología cuantitativa se basa en diversos observatorios oficiales, como el de la Policía Nacional, el Observatorio de Medicina Legal y la Oficina de Coordinación de Asuntos humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), así como registros de interés de Corpades y Análisis Urbano.

A partir de estos datos, se elaboran tablas que son analizadas de forma cuantitativa. Además, se realiza una lectura territorial enfocada en la presencia de actores armados, basada en los registros recopilados.

También se lleva a cabo un rastreo de prensa para identificar fenómenos y patrones en el territorio. Estos elementos sirven como base para iniciar una descripción detallada en el informe, cuya comprensión requiere una lectura general para entender las nuevas modalidades de conflicto presentes.

La metodología utilizada un análisis cuidadoso presentado en forma de tablas, permitiendo una comprensión objetiva de la situación.

Sin embargo, la metodología va más allá de los números. Se realiza una lectura territorial exhaustiva, considerando la presencia de actores armados y los fenómenos asociados.

El rastreo de prensa se convierte en una herramienta invaluable para identificar patrones y tendencias en el territorio.

El resultado es un informe que no solo brinda datos fríos, sino una descripción detallada y contextualizada de las nuevas modalidades de conflicto.

Para comprender plenamente esta compleja realidad, se requiere una lectura general del informe, sumergiéndose en sus páginas para captar la magnitud y las implicaciones de estos fenómenos.

Bibliografía

Análisis Urbano. (2022). Grupos Armados en Antioquia. Obtenido de https://analisisurbano.org/map/gruposantioquia/index.html#8/7.185/-75.240

Análisis Urbano. (25 de 11 de 2023). Al menos 410 feminicidios han sido cometidos este año en Colombia. Obtenido de https://analisisurbano.org/al-menos-410-feminicidios-han-sido-cometidos-este-ano-en-colombia/311550/

Análisis Urbano. (Agosto de 2023). Análisis Urbano. Obtenido de https://analisisurbano.org/ministro-de-defensa-asegura-que-colombia-tiene-la-tasa-de-homicidios-mas-baja-de-los-ultimos-10-anos/293948/

Análisis Urbano. (2023). Hombre mayor de la comunidad LGBTI fue apuñalado en El Poblado . Obtenido de https://analisisurbano.org/hombre-mayor-de-la-comunidad-lgbti-fue-apunalado-en-el-poblado/280373/

Análisis Urbano. (2023). Las cifras de homicidios en Antioquia: un caso de flagrante manipulación policial. Obtenido de https://analisisurbano.org/las-cifras-de-homicidios-en-antioquia-un-caso-de-flagrante-manipulacion-policial/268852/

Caracol Radio. (2023). En menos de 24 horas hallaron otro cuerpo embolsado en Medellín. Obtenido de https://caracol.com.co/2023/12/10/a-36-llegan-los-lesionados-con-polvora-en-antioquia/

Corpades. (2023). En el Oriente antioqueño van nueve homicidios en una semana: Cocho, jugador de la selección El Carmen de Viboral, fue una de las víctimas. Obtenido de https://analisisurbano.org/en-el-oriente-antioqueno-van-nueve-homicidios-en-una-semana-cocho-jugador-de-la-seleccion-el-carmen-de-viboral-fue-una-de-las-victimas/311974/

Corpades. (20 de 11 de 2023). Señores de la UNP, desmontar esquemas de seguridad a líderes sociales es declararlos objetivo militar. Obtenido de Análisis Urbano SAS: https://analisisurbano.org/senores-de-la-unp-desmontar-esquemas-de-seguridad-a-lideres-sociales-es-declararlos-objetivo-militar/310695/

Fundación Sumapaz. (2023). Infografía sobre casos de Masacres y asesinatos a personas defensoras de los Derechos Humanos en Colombia y en Antioquia. Medellín : Fundación Sumapaz.

Gutiérrez, l. V. (2012). La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y. Revista Colombiana de Sociología , pp. 15-33.

Hora 13. (Diciembre de 2023). Los combates en Briceño han dejado cientos de desplazados y un líder social muerto. Obtenido de https://www.h13n.com/los-combates-en-briceno-han-dejado-cientos-de-desplazados-y-un-lider-social-muerto-la-desinformacion-por-parte-de-actores-armados-ha-generado-panico-en-la-comunidad/229534/

IFM Noticias. (1 de Diciembre de 2023). NiUnaMenos: 107 mujeres asesinadas en Antioquia por hechos de violencia. Obtenido de https://ifmnoticias.com/niunamenos-107-mujeres-asesinadas-en-antioquia-por-hechos-de-violencia/

Medicinal Legal . (2023). Observatorio de Violencia . Obtenido de https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa

OCHA. (9 de 12 de 2023). Situación Humanitaria. Obtenido de https://monitor.unocha.org/colombia

Policía Nacional. (2023). Estadística Delictiva. Obtenido de https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva

RCN. (2023). Las duras críticas de Aníbal Gaviria a la paz total del Gobierno. Obtenido de https://www.noticiasrcn.com/colombia/anibal-gaviria-criticas-a-paz-total-de-gobierno-petro-440246

Urbano Análisis SAS. (2023). ¡Alerta! Colombia, el país más peligroso del mundo para los líderes sociales. Obtenido de https://analisisurbano.org/alerta-colombia-el-pais-mas-peligroso-del-mundo-para-los-lideres-sociales/269309/

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades y Agencia de Prensa Análisis Urbano 2023